



RESOLUCIÓN N°

5

Buenos Aires,

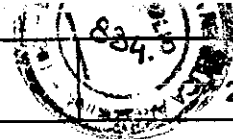
14 ENE 2004

VISTO:

El presente sumario en lo financiero N° 643, que tramita en el expediente N° 101.552/85, dispuesto por Resolución N° 829 del 19 de setiembre de 1989 del Presidente del Banco Central de la República Argentina (fs. 254/56), en los términos del artículo 41 de la Ley 21.526, que se instruye para determinar la responsabilidad de diversas personas físicas por su actuación en la entidad CARFINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (en liquidación), en el cual obran:

I. El informe N° 431/133/89 (fs. 236/53), como así los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones a fs. 1/235, que dieron sustento a las imputaciones formuladas, consistentes en:

- 1) Deficiencias en la integración de la Fórmula 3519, correspondiente al primer trimestre de 1985, e incorrecta registración de cobros parciales de créditos, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley N° 21.526, y de la Circular CONAU 1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131727 -Prendarios-, 131801 -Ajustes e intereses dev. a cobrar- y 321157 -Cobros no aplicados por operaciones vencidas-, y D. Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral/anual, Distribución del crédito por cliente, Normas de procedimiento.
- 2) Irregularidades en materia de política crediticia, conformación de legajos de deudores y constitución de previsión por riesgo de incobrabilidad, en transgresión a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, la Comunicación "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, puntos 1.1., 1.6., 1.7., y 3.1.; y la Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131901 - Sector privado no financiero. Previsión por riesgo de incobrabilidad- y 530000 - Cargo por incobrabilidad.
- 3) Inobservancia de la garantía prevista en el punto 3.6 de la Comunicación "A" 22, en transgresión a lo allí prescripto.
- 4) Falta de presentación de un plan de adecuación por excesos en activos inmovilizados, y pago de honorarios y gratificaciones normativamente prohibidos en tal situación, en transgresión a la Ley N° 21.526, art. 30, inciso d) y a la Comunicación "A" 414 LISOL-1, Capítulo V, apartados 4.1. y 4.5.
- 5) Incumplimiento de las normas sobre controles mínimos a cargo del Directorio, en transgresión a la Circular I.F. 135, Anexo, puntos 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.4.1. y 2.
- 6) Incumplimiento de normas mínimas sobre auditorías externas, en transgresión a la Comunicación "A" 7, CONAU-1, Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, Anexo II, párrafos primero y sexto, y Anexo III, puntos I.B. y II.B.



II. La nómina de personas involucradas en el sumario que son: Adolfo M. AGUILERA, Enrique Alfredo VIEL, Edgardo Rubén GIOSA, Roberto José ESTRADA, Alberto Ernesto COMINELLI, Luis Pedro PICCHI, Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA, Guillermo Esteban COPPOLA, Juan Oscar GARCIA GARZON, Daniel José VIGO, Benjamín SZPAYZER, Juan Jorge Guido TROYER, Luis Alejandro CARDOSO y Ricardo CASTELLI (fs. 255/256).

III. Las notificaciones efectuadas, vistas conferidas, descargos presentados y documentación agregada por los sumariados que obran a fs. 258/621 de las que da cuenta la recapitulación que corre a fs. 622/23.

IV. El auto que dispuso la apertura a prueba del sumario (fs. 624/26), las notificaciones cursadas, las diligencias producidas y la documentación e información agregadas en consecuencia (fs. 627/778).

V. El auto que cerró dicho período probatorio (fs. 779/80), las notificaciones cursadas (fs. 781/802, 804/809) y los escritos presentados (fs. 810 subfs. 1/4, 811 subfs. 1/7, 814 subfs. 1/8, 815 subfs. 1/6, 816 subfs. 1/9, 817 subfs. 1/4, 818 subfs. 1/5, 819 subfs. 1/3, 820 subfs. 1/8, y 821), y

CONSIDERANDO:

I. Que previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar las imputaciones de autos, los elementos probatorios que las avalan y la ubicación temporal de los hechos que las motivan.

1. Que con referencia al cargo 1) -Deficiencias en la integración de la Fórmula 3519, correspondiente al primer trimestre de 1985, e incorrecta registración de cobros parciales de créditos- cabe señalar que los hechos que lo constituyen fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

Señala el informe de la propuesta sumarial que a fs. 3 se da cuenta de uno de los primeros cometidos desarrollados por la inspección actuante que consistió precisamente, en el análisis de las Fórmulas 3519 presentadas por la entidad a nuestra Institución.

Se advirtió así que las cifras incluidas en la Fórmula 3519 correspondiente al primer trimestre de 1985, evidenciaban que los cincuenta principales deudores representaban el 27,3 % de la cartera de préstamos. (fs. 3).

Ahora bien, dentro de ese 27,3 % constituido por los deudores mayores, los préstamos con garantía preferida, representaban el 16,1 %.

Según se recordó en el Capítulo I del informe de cargos la actividad principal de la entidad, al menos en sus primeros tiempos, era la financiación de unidades vendidas por Concesionarios de la marca FIAT.

Tal es la razón de que ese rubro de "préstamos con garantía preferida" estuviese prioritariamente integrado por créditos protegidos mediante prendas con registro sobre automóviles.

Y, acota el Informe N° 712-1392/85, "la casi totalidad de los créditos con

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.
----------	--	--



garantía preferida, lo componían prendas sobre vehículos cuyo valor de realización era inferior a la deuda" (fs. 3).

En tales condiciones la Fórmula 3519 resulta incorrectamente integrada pues la diferencia entre ambos valores debió incluirse en los ítems "Otras garantías" o bien "sin garantía", sobre la base de que mediaran o no codeudores y/o avalistas (ver fs. 7/8). Este aspecto fue incluido en el memorando de conclusiones de la inspección (fs. 38, punto I, apartado 2do., y Anexo I de fs. 44, donde se detallan 19 créditos que presentaban las características descriptas).

Por otra parte, se analizaron cuatro casos en que se procedió al remate judicial de los vehículos no habiendo cubierto su producido el total de la deuda, en los cuales la entidad, en lugar de disminuir el saldo adeudado, y por lo tanto el rubro "Préstamos" (Activo), registró lo obtenido en la subcuenta "Cobranzas vencidas sin imputar" del rubro "Otras obligaciones por Int. Financiera" (Pasivo), abultando el devengamiento de intereses de las respectivas acreencias.

Como ejemplo puede citarse el caso de Nilda L. de los Santos de Inzo, en que del remate se obtuvieron montos insuficientes para saldar su deuda. No obstante se mantuvo el saldo originario en su cuenta. De haberse disminuido la deuda aplicando el pago resultante de la ejecución dicha prestataria no integraría la nómina de los 50 principales clientes; además, seguía informándose como "Con garantía preferida" pese a la desaparición del privilegio al ejecutarse el bien.

Los otros tres casos corresponden a los deudores Carlos Kominko, Carlos Corbella y Juan Carlos Brizuela (mayores precisiones obran a fs. 7 "in fine" y fs. 8, primero y segundo párrafos).

Los aspectos señalados en los tres párrafos precedentes fueron incluidos en el memorando de conclusiones de la inspección (fs. 38, punto 1, primer apartado y fs. 39, punto 3.2.).

La presente infracción se halla configurada al 31.3.85.

1.1. Las defensas no han desvirtuado las anomalías imputadas -y, en algunos descargos, sólo se han argumentado cuestiones que resultan ajenas a sus hechos configurantes- referidas tanto a la forma incorrecta en que se procedió a integrar la fórmula 3519, cuanto a la manera en que se registraron erróneamente determinados cobros parciales, conforme fuera descripto precedentemente.

1.2. En consecuencia, ante la suma de elementos probatorios pormenorizados en la acusación, los cuales no fueron desvirtuados por los descargos presentados en autos, se tiene por acreditado el cargo 1) referente a "Deficiencias en la integración de la Fórmula 3519, correspondiente al primer trimestre de 1985, e incorrecta registración de cobros parciales de créditos", en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley N° 21.526, y de la Circular CONAU 1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131727 -Prendarios-, 131801 -Ajustes e intereses dev. a cobrar- y 321157 -Cobros no aplicados por operaciones vencidas-, y D. Régimen informativo para control interno del B.C.R.A. trimestral/anual, Distribución del crédito por cliente, Normas de procedimiento.

2. Que con relación al cargo 2) -Irregularidades en materia de política crediticia, conformación de legajos de deudores y constitución de previsión por riesgo de incobrabilidad- cabe señalar que los hechos que lo configuran fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

Consta en la acusación que la revisión de la Fórmula 3519 comentada en el cargo 1, llevó a la inspección actuante a encarar el estudio de los legajos de crédito.

Conforme se asevera a fs. 4, a la fecha de estudio se encontraron 44 legajos de crédito desactualizados, 6 que carecían de constancias previsionales y 9 en los que no surgía el destino dado a los fondos por los prestatarios (Ver además, anexo de fs. 19/26 columna "Observaciones" y memorando de conclusiones, fs. 40/1, punto 6.3).

La profundización de este aspecto posibilitó descubrir, en materia de política de crédito, otras anomalías.

En efecto, el Parte de Inspección N° 3 (fs. 201 y siguientes), da cuenta de que uno de los clientes circularizados y entrevistados, Amnesó S.A., manifestó que siendo genuina su deuda, resultaban ficticias tanto la ulterior cancelación de ese mismo crédito como un supuesto nuevo crédito que aparece concedido a los pocos días. La propia deudora, que reconoce su vinculación con Feinver S.A. (operadora del mercado interempresario), comentó los detalles del negocio vinculado merced al cual, so pretexto de la cancelación de la deuda preexistente, se le otorgó irregularmente otro préstamo.

Siempre en el aludido Parte N° 3, (que lleva anexa un Acta labrada con el cliente (fs. 212), se denuncia la anormalidad detectada respecto de S.A. Sol Explotación de Petróleo.

Sucedió que para el lapso marzo/abril de 1985 la entidad registraba egresos de fondos -detalle a fs. 203, inc.b-, en favor de S.A. Sol Explotación de Petróleo, en concepto de "adelantos transitorios" (fs. 4).

Sin embargo, la supuesta prestataria negó haber recibido los fondos en cuestión, amén de que en este caso, junto con varios otros, faltaban la respectiva solicitud de crédito y los pertinentes recibos (ver fs. 212).

De acuerdo con lo que se advierte a fs. 5, la S.A. Sol Explotación de Petróleo fue tan sólo uno de los casos descubiertos de supuestos créditos, en los que faltaban solicitud y recibo (ver a fs. 5, la mención de los supuestos análogos de los Sres. Badaracco y Cornejo Saravia). Cabe señalar que los fondos supuestamente otorgados eran llevados al despacho del presidente de Carfina, Sr. Estrada, quien impartía las órdenes sobre el manejo de estas operaciones, según manifestaciones del tesorero ratificadas por la Jefa de Crédito (Ver fs. 4 "in fine" y 5. primer párrafo, fs. 203, último párrafo, y actas labradas al tesorero y a la Jefa de Créditos a fs. 214 y 215). En cuanto a las cancelaciones de tales deudas el tesorero manifestó no recordar de quien recibía los importes respectivos. Por último, se señala que a fs. 228 "in fine", el Gerente Administrativo declara que tales operaciones fueron autorizadas por la "máxima autoridad" de la entidad (Ver además a fs. 12 punto 4).

Volviendo al tema mencionado más arriba, del destino dado a los fondos correspondientes a operaciones crediticias, parece de interés recordar algunos párrafos del Informe N° 712-1392/85.

a) Haras La Calandria: (deudor N° 3 que funcionaba en una oficina de la firma "Aratur S.A.") si bien reconoció su deuda, no logra justificar plenamente el destino de los fondos. (Acta anexa a fs. 88).

b) El Sr. Jorge A. Pierrestegui: (deudor N° 5) cuya actividad es agente de bolsa y la

explotación de un campo familiar, además de haber operado con adelantos transitorios (sin especificar destino de los fondos), a la fecha de estudio mantenía un crédito amortizable en cinco cuotas anuales acordado para "compra de hacienda". También es avalista de un crédito acordado al Sr. Roberto J.P. Meade (deudor N° 11) quien no cumplió con los requerimientos efectuados tendientes a demostrar su actividad agropecuaria. Este último realizó una amortización de su deuda el día 23.01.85, en coincidencia con la cancelación de la deuda mantenida por el Sr. José I. Rodríguez Zamboni (socio de Pierrestegui). La Sra. María Teresa Molino de Pierrestegui quien era representada por su hijo, el Sr. Jorge A. Pierrestegui en su carácter de apoderado, también fue tomando créditos durante el trimestre. Los Sres. Meade y Rodríguez Zamboni presentan certificaciones de ingresos firmadas por el mismo Contador Público y sin la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Si bien estos prestatarios han evidenciado capacidad de pago durante el período analizado, resulta del caso informar que según hechos que han trascendido a la inspección actuante, el Sr. Pierrestegui habría estado sufriendo dificultades financieras a raíz de la cesación de pagos en el mercado interempresario de la firma "Interempresas". De acuerdo a ello se estimó la incobrabilidad de este deudor, la cual se hizo extensiva a la del Sr. Roberto Meade atento a la diversas afinidades puntualizadas.

c) El Sr. Santiago Gradín (deudor N° 7) se endeudó a título personal para comprar maquinaria industrial que se infiere está destinada a la firma L. Gradín y Cía. S.A. de la cual es accionista ya que en forma particular no posee actividad industrial. Esta empresa (deudor N° 21), es la única de las nombradas en estos apartados que operó con la anterior gestión, con descuento de documentos y tras un período de inactividad vuelve a operar, esta vez mediante "adelantos transitorios" a partir del 30.11.84, sin especificar en muchos casos el destino de los fondos. Su deuda pendiente la constituye un crédito a 182 días cuyo vencimiento operó el 03.06.85. Con fecha 17.07.85 la entidad -en liquidación- le envió telegrama de intimación de pago y ante la falta de contestación, con fecha 26.07.85 el sector legales se comunicó con el Dr. Francisco Gradín quien manifestó que tenía entendido que esta deuda estaba cancelada y que haría las consultas del caso. Considerando que el Dr. Francisco Gradín (Vicepresidente de L. Gradín y Cía. S.A.) participó en la confección de los "reconocimientos de deuda" efectuados por el Sr. Picchi -Vicepresidente de Carfina- en su carácter de Apoderado General del Obispado de Venado Tuerto ante los acreedores de cheques vencidos, se considera que una circularización no arrojaría resultados de trascendencia. Atento a las dificultades afrontadas por esta sociedad, la ausencia de garantía sobre la deuda vencida, se estimó la incobrabilidad de esta acreencia.

d) Eugenio Askenazi: (deudor N° 25) Sus participaciones societarias las comparte con el Sr. Angel Pedro Arias (entre ellas la extrabursátil Jerjes S.A.) y según manifestaciones de bienes de ambos al 22.10.84 (instrumentadas por el mismo Contador Público) eran deudores del Obispado de Venado Tuerto en A 1.446,475 cada uno. Estos deudores fueron beneficiarios de sendos créditos por A 1.000 el 01.10.84 con vencimiento el 06.10.85 para la compra de equipo de computación. Todos los créditos por "adelantos transitorios" solicitados (más de veinte cada uno hasta A 25.000), fueron tomados en forma individual en fechas idénticas.

Las circunstancias señaladas respecto al destino de los créditos permiten inferir que los fondos fueron derivados hacia fines inciertos, en tanto que la inexistencia o desactualización de elementos en los legajos de deudores, lleva a concluir que no se efectuaban los análisis previos para determinar la viabilidad de los otorgamientos, todo ello en contraposición a las normas sobre

política de crédito emitidas por este Banco Central.

Quedó dicho en el Capítulo I *-Introducción de la pieza acusatoria-* que la entidad poseía una importante cartera de préstamos prendarios en mora y en gestión judicial.

Según se señala a fs. 6 existían más de 600 juicios en trámite, llevados con las deficiencias que puntualiza el Informe N° 712-1392/85.

Ahora bien, en las hipótesis en que se arribó a la subasta judicial del bien gravado, la realidad demostró -como se dijo en el cargo 1- que el producido del remate era muy inferior al valor asignado contablemente lo cual llevó a la inspección a realizar un exhaustivo análisis de los montos no cubiertos con previsiones específicas.

Del análisis del grado de cobrabilidad de 70 deudores (50 incluidos en la fórmula 3519 al 31.03.85 y 20 más elegidos al azar), pudo establecerse que la previsión respectiva constituida a dicha fecha resultaba insuficiente en la suma de A 70.253 (memorando de conclusiones, punto 2, fs. 39, y detalle de deudores a prever, fs. 44).

Del monto indicado, A 39.210 correspondían a 35 créditos prendarios que representaban el 73,5% de la muestra.

La proyección de ese porcentaje a la totalidad de la cartera de juicios prendarios, arroja un quebranto potencial de A 233.914 que sumado a la incobrabilidad estimada para el resto de los créditos incluidos en la fórmula 3519 al 31.03.85, ascendía a A 266.676 (ver fs. 9, primer párrafo, y memorando de conclusiones, punto 2 "in fine", fs. 39).

Tal cifra, significaba el 111% de la Responsabilidad Patrimonial Computable de la entidad.

Lo expuesto resulta demostrativo de la incorrecta valuación de la cartera de créditos y por lo tanto de la situación patrimonial de la entidad, que surgía de la información presentada por la misma en sus estados contables al 31.03.85.

Para un mayor desarrollo de este aspecto cabe remitirse a las planillas glosadas a fs. 19/26, donde caso por caso se analizan los créditos observados estudiándose, particularizadamente, este tópico de la previsión por riesgos de incobrabilidad.

Las anomalías descritas fueron detectadas a la fecha de estudio de la fórmula 3519, es decir al 31.3.85, persistiendo hasta el 28.06.85, fecha en que se dispuso la revocación de la autorización para funcionar de la entidad.

2.1. En sus respectivas defensas los sumariados Benjamín SZPAYZER (fs. 320/32), Juan Jorge Guido TROYER (fs. 421/33) y el encartado Luis Alejandro CARDOSO -en tanto se remite a los descargos de aquéllos- (fs. 607/10), manifiestan que la constitución de la previsión por riesgo de incobrabilidad deviene de la valoración subjetiva de los administradores, sosteniendo, a su vez, que la apreciación y evaluación formulada por la Inspección y el "quebranto potencial" que de la muestra surgiría -según esta apreciación- no son compartidas por los nombrados en su calidad de síndicos.

2.2. Al respecto, no obstante la mera discrepancia expuesta por los sumariados acerca de los riesgos de incobrabilidad evaluados por la inspección actuante y las previsiones a constituir, procede señalar que más allá del criterio de razonabilidad establecido por las normas



aplicables para estimar dichas previsiones, también prescribe la Comunicación "A" CONAU-1, Código 131.901 que las entidades deberán tener en cuenta las siguientes pautas mínimas: "...En el caso de los préstamos correspondientes a "Deudores con riesgo de insolvencia" y a "Deudores en gestión judicial", que no cuenten con garantías preferidas, a los fines de cuantificar la previsión que deberá constituirse a su respecto, se ponderará razonablemente en qué medida las distintas circunstancias que han llevado a calificarlos en las mencionadas categorías..."...inciden sobre la cobrabilidad de los préstamos. A los fines de esta ponderación, se tendrán en cuenta todos los elementos de juicio que resultaren ilustrativos a tal objeto, entre ellos, informes de auditores y letrados, vicios de forma en la documentación que pudieran enervar los derechos de crédito de la entidad, etc.". Luego, resulta a todas luces que, a tenor de todas y cada una de las circunstancias consideradas por la inspección, mencionadas en el informe acusatorio, la entidad no ponderó adecuadamente, ni practicó debidamente las previsiones a que estaba obligada.

2.3. En consecuencia, ante la suma de elementos probatorios pormenorizados en la acusación, los cuales no fueron desvirtuados por los descargos presentados en autos, se tiene por acreditado el cargo 2) referente a "Irregularidades en materia de política crediticia, conformación de legajos de deudores y constitución de previsión por riesgo de incobrabilidad", en transgresión a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, la Comunicación "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, puntos 1.1., 1.6., 1.7., y 3.1.; y la Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131901 - Sector privado no financiero. Previsión por riesgo de incobrabilidad y 530000 - Cargo por incobrabilidad.

3. Que con respecto al cargo 3) -Inobservancia de la garantía prevista en el punto 3.6 de la Comunicación "A" 22- en transgresión a lo allí prescripto, cabe señalar que los hechos que lo constituyen fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

El Parte de la Inspección N° 4 advierte que habiéndose examinado los documentos afectados por la entidad en garantía de los redescuentos recibidos, de conformidad con la Comunicación "A" 22, "se observó que los valores dados como respaldo" "no fueron reemplazados al operarse sus vencimientos y/o cancelaciones" (fs. 220).

Añade que los no vencidos fueron nuevamente ofrecidos por la entidad, esta vez de los fondos recibidos merced al régimen implementado por la Comunicación "A" 646.

Frente a estas comprobaciones Carfina Compañía Financiera S.A., por nota del 17.06.85 (que con la firma de su Presidente luce en original anexada al Parte N° 4 -fs. 222-), manifiesta "que los redescuentos obtenidos bajo el régimen de la Circular "A" 22 no cuentan, en la actualidad, con la garantía requerida por la mencionada Circular en su apartado 3.6."

Continúa diciendo esa carta: "En consecuencia los A 54.897 que importan el valor de los mismos al 31.05.85 no tienen la garantía que fuera ofrecida al momento de su acreditación, ya que los respectivos créditos prendarios han sido cancelados, enviados para su cobro por la vía judicial o caucionados a vuestro favor en garantía del redescuento solicitado bajo las disposiciones de la Comunicación "A" 646".

Concluye afirmando: "que contamos en la actualidad con documentos de nuestra cartera líquida para ofrecer en garantía por el redescuento de la referencia, por un valor de A 3.600".

Esta carta, firmada por el Presidente de la entidad pocos días antes de su liquidación, constituye la prueba más irrefutable de cargo que aquí se formula.

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	8
----------	--	---

La irregularidad descripta se tiene por configurada al 17.06.85 fecha en que los hechos infraccionales son expresamente reconocidos por el presidente de la entidad. (fs. 222).

3.1. En su defensa de fs. 577/83 el prevenido Guillermo Esteban COPPOLA sostiene que, al momento de asumir su cargo directivo, no podía reponerse el porcentaje de garantía -del 120 %- previsto en la Comunicación "A" 22, puesto que la cartera líquida no representaba ni el 10 % de los redescuentos oportunamente recibidos.

3.2. Sobre el particular, es de indicar que este concepto defensivo esgrimido por el señor COPPOLA no difiere del expresado por el Presidente de la entidad en su nota del 17.06.85 en oportunidad de contestar las observaciones detectadas por la Inspección actuante, y que fueran volcados "ut supra" en el informe acusatorio. En tal sentido, procede advertir que dichos argumentos en modo alguno pueden servir de excusa ante el incumplimiento normativo reprochado, y no hacen más que implicar un reconocimiento de tales hechos. Ello es así, en tanto se permitió imprudentemente que estas garantías fueran disminuyendo y nada se hizo para mantener cubiertas estas exigencias de la Comunicación "A" 22, puesto que no se impulsó la cancelación de los redescuentos recibidos -en tanto la cartera de préstamos iba siendo cancelada- ni se procuró de alguna manera sustituir dichas garantías en la medida de su disminución progresiva.

3.3. En consecuencia, ante la suma de elementos probatorios pormenorizados en la acusación, los cuales no fueron desvirtuados por los descargos presentados en autos, se tiene por acreditado el cargo 3) referente a "Inobservancia de la garantía prevista en el punto 3.6 de la Comunicación "A" 22", en transgresión a la citada normativa.

4. Que con respecto al cargo 4) -Falta de presentación de un plan de adecuación por excesos en activos inmovilizados, y pago de honorarios y gratificaciones normativamente prohibidos en tal situación- cabe señalar que los hechos que lo configuran fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

Indica dicho Informe que la Comunicación "A" 414 LISOL-1, de fecha 25.11.83, establece en su capítulo V, punto 4.1., que: "Las entidades que incurran en incumplimientos durante tres meses consecutivos, deben presentar un plan de adecuación"... "dentro de los 30 días siguientes al mes en que se haya producido el exceso que determine esa obligación, basado en el aumento de la responsabilidad patrimonial o, en su caso, en la eliminación de los excesos a las relaciones".

De acuerdo con lo informado a fs. 10, Carfina Compañía Financiera S.A., a partir del mes de febrero de 1985, incurrió en excesos en punto a activos inmovilizados (107% en dicho mes).

Esta situación se mantuvo, agravada, a lo largo de marzo (116%), abril 132%) y mayo (159%) -ver detalle de fs. 10, punto 4.2.-.

O sea, en conjunto, de cuatro meses consecutivos.

Según la norma arriba transcrita, la entidad, antes del 31.5.85, debió presentar un Plan de Adecuación.

Vencido el término respectivo y no cumplimentada tal obligación, esta Institución intimó a Carfina Compañía Financiera S.A. por telegrama del 16.06.85 (ver fs. 10).



B.C.R.A.

Referencia

Exp. N° 101.552/85

Act.

9

No obstante ello, hasta el momento mismo de su liquidación, la entidad continuó sin presentar el plan que le había sido exigido.

Por otra parte, debe recordarse que el punto 4.5., también del capítulo V., de la precitada Comunicación "A" 414 determina que: "en tanto el plan de regularización no haya sido aprobado por el Banco Central o se incurra en su incumplimiento, no pueden distribuirse dividendos y otras retribuciones en efectivo al capital, remesarse utilidades ni efectuarse pagos de honorarios, participaciones o gratificaciones dependientes de los resultados".

Sin embargo, conforme consta a fs. 10, durante el mes de mayo de 1985, la entidad, aún no habiendo presentado el plan de adecuación al que estaba obligada, abonó honorarios a dos integrantes del Directorio y a dos miembros de la Sindicatura, amén de pagarle gratificaciones al Gerente Administrativo y a un adscripto (detalle a fs. 10 "in fine" y comprobantes de los pagos descriptos a fs. 116/20).

El lapso infraccional se halla comprendido entre el 17.05.85 (fs. 10) hasta el 28.06.85, fecha en que se dispuso la revocación de la autorización para funcionar de la entidad.

4.1. En sus respectivas defensas los sumariados Benjamín SZPAYZER (fs. 320/32), Juan Jorge Guido TROYER (fs. 421/33) y el encartado Luis Alejandro CARDOSO -en tanto se remite a los descargos de aquéllos- (fs. 607/10), sostienen que el cargo imputado reviste un mero carácter formal, reconociendo el prevenido SZPAYZER, a su vez, haber percibido honorarios correspondientes al mes de mayo de 1985. Por su parte, el encartado Guillermo Esteban COPPOLA (fs. 577/83) manifiesta, con relación al pago irregular de honorarios, que no existían impedimentos para que ellos fueran abonados, puesto que no se había presentado aún ningún plan de regularización, ni había vencido el término para hacerlo.

4.2. Al respecto, procede poner de resalto que dichas manifestaciones en modo alguno logran desvirtuar la configuración infraccional de los hechos imputados -a tenor de los antecedentes fácticos descriptos en la pieza acusatoria- frente a la exigencia clara y precisa prevista por las normas encuadrantes del caso, lo cual ha puesto en evidencia el desinterés y desidia en regularizar la situación anómala, demostrado por las autoridades de la entidad. Y, con relación a las manifestaciones del señor COPPOLA, es del caso señalar que si -como reconoce el prevenido- no había ningún plan de regularización presentado, existía sin embargo la obligación de hacerlo y el pago de honorarios se efectuó indebidamente en tanto se hallaba pendiente de cumplimiento la presentación de dicho plan.

4.3. En consecuencia, ante la suma de elementos probatorios pormenorizados en la acusación, los cuales no fueron contrarrestados por los descargos presentados en autos, se tiene por acreditado el cargo 4) referente a "Falta de presentación de un plan de adecuación por excesos en activos inmovilizados, y pago de honorarios y gratificaciones normativamente prohibidos en tal situación", en transgresión a la Ley N° 21.526, art. 30, inciso d) y a la Comunicación "A" 414 LISOL-1, Capítulo V, apartados 4.1. y 4.5.

5. Que con respecto al cargo 5) -Incumplimiento de las normas sobre controles mínimos a cargo del Directorio.- cabe señalar que los hechos que lo configuran fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

Surge de la pieza acusatoria que en lo atinente al cumplimiento de los controles mínimos, la inspección actuante pudo establecer las deficiencias que se detallan seguidamente (fs. 12/3, punto 6.2.1.):

Con respecto a los controles correspondientes al año 1984, que fueron delegados al Dr. Juan García Garzón (quien se desempeñaba como auditor externo y síndico) no fueron cumplimentados los siguientes:

Trimestrales: Punto 1.2.1. Documentos en cartera y valores de terceros depositados al cobro en custodia y valores en garantía.

Punto 1.2.3. Registro de firmas de depositantes.

Punto 1.2.4. Saldos de cuentas que relacionan la casa central con las filiales.

Semestrales: Punto 1.3.1. Registros contables, saldos activos y pasivos no comprendidos en los anteriores controles.

Anuales: Punto 1.4.1. Informe al Directorio sobre las cuentas que se consideran parcial o totalmente incobrables o de dudoso cobro. Cabe destacar la relevancia de este aspecto frente a la situación de la cartera de créditos descrita en el cargo 2.

Siempre vinculado con 1984 es útil recordar que la Circular I.F. 135, en su punto 2. obliga a realizar todos los controles y arqueos cada vez que "se modifique la constitución del directorio", "con la intervención de los nuevos miembros que se incorporen".

El 06.12.84 se realizó en la entidad una Asamblea General Ordinaria, que eligió un nuevo Directorio (fs. 49).

Ese mismo día, asumieron sus cargos los flamantes directores.

Sin embargo, no se realizaron los controles arriba mencionados, que imponía la Circular I.F. 135.

En el lapso de 1985 sometido a análisis (primer trimestre), se hallaron las mismas carencias que para 1984, en punto a controles trimestrales (puntos 1.2.1. y 1.2.4. del Anexo a la Circular I.F. 135, aclarándose que en este periodo los controles fueron delegados en el Dr. Ricardo Castelli, auditor externo a partir del 01.01.85.

Los aspectos señalados fueron incluidos en el memorando de conclusiones de la inspección (punto 7, a fs. 41).

El lapso infraccional se halla comprendido entre el 01.01.84 hasta el 31.03.85 (Ver memorando de conclusiones de la inspección a esta fecha de estudio -fs. 41, punto 7-).

5.1. En sus respectivas defensas los sumariados Enrique Alfredo VIEL (fs. 310/11) y Daniel José VIGO (fs. 313/14) manifiestan que la inexistencia de constancias sobre dichos controles no implica que no fueran realizados sino que, a lo sumo, constituirían un defecto formal, señalando, además, que ello no causó perjuicio alguno a la entidad. También el incoado Edgardo Rubén Giosa (fs. 317/19) señala que las presuntas infracciones aludidas en este cargo se vinculan con hechos formales. El prevenido Adolfo Meliton AGUILERA (fs. 522/25) intenta minimizar la necesidad de efectuar determinados controles, en tanto no siempre se darían los hechos sujetos a dichos controles exigidos por la norma. Por su parte el encartado Juan Oscar GARCIA GARZON (fs. 298/309) sostiene similares argumentos a los arriba mencionados, en tanto señala que dichos controles se llevaban a cabo, aunque se omitió transcribirlos en actas; agregando que, respecto de algún punto en particular a controlar, estaban comprendidos en los informes de la Comisión



Fiscalizadora; intentando demostrar que varias de las actividades que fueron desarrolladas en su calidad de síndico o auditor involucraron el análisis de los controles previstos por la Circular I.F. 135, pese a la falta de registración precisa en el libro respectivo.

5.2. Al respecto, se impone poner de resalto que las manifestaciones de los encartados en modo alguno pueden desvirtuar la existencia de las irregularidades que fueran reprochadas, toda vez que ellas se evidencian claramente más allá del intento de calificarlas como meros defectos formales, puesto que la prueba efectiva de la realización de los controles mínimos - previstos en la normativa aplicable- la constituye precisamente la formalización de los mismos en el Libro respectivo. Sobre este particular la Circular I.F. 135 quita toda duda acerca del modo en que deben cumplimentarse dichos controles en tanto en el punto 1 de su Anexo expresa que: "Sin perjuicio de los arqueos y controles a cargo del personal superior, de los que efectúe el órgano de fiscalización en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 340 del Código de Comercio y de los que correspondan en determinadas circunstancias o hayan sido establecidos por los estatutos, el directorio o consejo de administración designará anualmente a uno o más de sus miembros para que, previa invitación a la sindicatura y con la frecuencia mínima que en cada caso se señala, realicen controles sobre los siguientes conceptos:...." Asimismo, el punto 3. de la mencionada circular señala que: "De todos los arqueos, controles y análisis que efectúen el directorio o consejo de administración y el órgano de fiscalización, se dejará constancia detallada en libros de actas habilitados expresamente, con indicación de sus resultados..."

5.3. En consecuencia, ante los elementos probatorios aludidos en la pieza acusatoria, los cuales no pueden ser contrarrestados por los argumentos defensivos presentados en autos, se tiene por acreditado el cargo 5) referente a "Incumplimiento de las normas sobre controles mínimos a cargo del Directorio", en transgresión a la Circular I.F. 135, Anexo, puntos 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.4.1. y 2.

6. Que con respecto al **cargo 6) -Incumplimiento de normas mínimas sobre auditorías externas-** cabe señalar que los hechos que lo configuran fueron descriptos en el Informe N° 431/133/89 (fs. 236/253).

Surge del mencionado Informe que durante el período comprendido entre el 01.01.84 y el 30.9.84 -dicho informe extiende erróneamente la función del Sr. García Garzón hasta el 31.12.84-, la auditoría externa de la entidad estaba a cargo del Dr. Juan Oscar García Garzón; quien, simultáneamente, se desempeñaba en calidad de Síndico Titular (fs. 12).

Al cierre del ejercicio económico se constataron las siguientes falencias en el cumplimiento de las pruebas sustantivas, incluidas en el memorando de conclusiones del 08.10.85 (fs. 41/2 punto 8):

- No realizadas: nros. 7, 14 y 24.
- Realizadas pero que no se confeccionan papeles de trabajo (por lo que cabe considerarlas como incumplidas): nros. 5, 8, 10, 12, 41 y 44.
- No realizadas por considerarlas de escasa significatividad: nros. 29 y 49.
- Realizadas pero conservándose únicamente las planillas finales de saldos (lo cual no acredita un adecuado cumplimiento): nros. 13, 23, 25, 33, 42 y 55.
- Realizadas pero que se extraviaron los papeles de trabajo (al no existir constancias, cabe

considerarla incumplida): n° 32.

Resulta fundamental destacar que esas conclusiones, lejos de constituir manifestaciones unilaterales de la inspección actuante, no son más que las propias confesiones del Dr. García Garzón volcadas en el Acta del 31.07.85 (ver a fs. 121/3).

Desde octubre de 1984 la auditoría externa estuvo a cargo del Dr. Ricardo Castelli, de acuerdo con la información suministrada a fs. 12.

Para la ponderación de su desempeño cabe, nuevamente, remitirse al precitado Memorando del 08.10.85 (fs. 41/2).

Allí se puntualiza que, a lo largo de la gestión del Dr. Castelli (de octubre de 1984 a junio de 1985), tan sólo se cumplimentaron parcialmente las pruebas números 8, 12, 13, 14 y 41, no habiéndose llevado a cabo las números 15, 28, 29, 42, 44 y 45.

Al igual que en el caso del Dr. García Garzón, el Memorando se limita a reproducir las aseveraciones del Dr. Castelli, reconociendo implícitamente las deficiencias apuntadas, obrantes en el Acta del 15.08.85 que luce a fs. 124.

Además, la inspección observó que no se había realizado el examen de saldos al cierre del ejercicio a fin de verificar la existencia de ajustes a dicha fecha que afecten significativamente la situación patrimonial o la determinación de los resultados del período, procedimiento que debe llevar a cabo todo profesional que efectúe el trabajo por primera vez, conforme las Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, Anexo II (memorando citado, fs. 42).

Las irregularidades descriptas se tienen por configuradas al 30.06.84 -fecha del respectivo balance anual- y en el período octubre/84 a mayo/85. (según fs. 42 y 124).

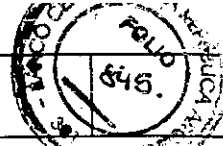
6.1. Que, en razón de lo expuesto y no habiendo aportado los prevenidos elementos aptos para desvirtuar la imputación formulada, cabe tener por acreditado al cargo 6) referido al "Incumplimiento de normas mínimas sobre auditorías externas", en transgresión a la Comunicación "A" 7, CONAU-1, Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, Anexo II, párrafos primero y sexto, y Anexo III, puntos I.B. y II.B.

7. Que, habiéndose analizado los hechos configurantes de las distintas imputaciones de acuerdo con las constancias de autos, se han tenido por probados los cargos 1), 2), 3), 4), 5) y 6); consecuentemente, cabe efectuar la atribución de responsabilidades a las personas sumariadas, teniendo en cuenta sus períodos de actuación dentro de los lapsos en que se produjeron los hechos constitutivos de los ilícitos acreditados.

II. Adolfo Melitón AGUILERA (Presidente, 29.03.83/06.12.84), **Enrique Alfredo VIEL** (Vicepresidente 1°, 29.03.83/06.12.84), y **Edgardo Rubén GIOSA** (Vicepresidente 2°, 29.03.83/06.12.84).

8. Que la situación de los sumariados mencionados en el epígrafe será tratada en forma conjunta en razón de haber desempeñado iguales roles directivos, durante idénticos períodos de actuación y en virtud de haber sido inculcados por el mismo ilícito, sin perjuicio de señalarse las diferencias que pudiera presentar cada caso.

En tal sentido, cabe esclarecer la eventual responsabilidad de los nombrados a quienes se les imputa el cargo 5) formulado en el presente sumario, debiendo señalarse que se les



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	13
----------	--	----

achaca especial participación en sus hechos configurantes por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en sus condiciones de miembros del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

Asimismo, cabe dejar constancia que el nombre completo del sumariado mencionado en primer término, es tal como figura en el título, conforme se desprende de su defensa obrante a fs. 522/25.

9. En sus respectivos descargos que lucen a fs. 522/25, 310/11, y 317/19, los prevenidos exponen similares argumentos defensivos, sosteniendo que si existió alguna infracción a la Circular I.F. 135, ella consistió simplemente en el no cumplimiento estricto de las formas rituales de dicha Circular pero en modo alguno la omisión fue voluntaria y/o tendiente a ocultar situaciones irregulares, ni fue causa de las circunstancias que desembocaron en la liquidación de la entidad. Arguyen que se desempeñaron con la mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones como integrantes del órgano de administración. Asimismo, expresan que no ha existido intencionalidad subjetiva de sus partes y que las omisiones indicadas no han perjudicado el desenvolvimiento de la entidad

Con referencia a la cuestión de fondo, los sumariados han realizado ciertos cuestionamientos insustanciales con los que intentan demostrar la inexistencia de infracción respecto del cargo formulado; argumentos que son los volcados en el precedente punto 5.1., al cual cabe remitirse en honor a la brevedad y que fueron adecuadamente analizados y refutados.

Finalmente hacen reserva, respectivamente, de sus derechos a impugnar por inconstitucional la ley 21.526, por fijar plazos de prescripción mayores a los establecidos para delitos tipificados en el Código Penal.

Por otra parte, los sumariados AGUILERA, VIEL y GIOSA a fs. 819 subfs. 1/3, fs. 816 subfs. 1/8 y fs. 817 subfs. 1/4, respectivamente, efectúan presentaciones a modo de alegato, con motivo del cierre de la etapa probatoria, en la cual plantean una excepción de prescripción sobre la base de la aplicación de principios e instituciones que son propios del derecho penal; argumentando, a su vez, que el auto de apertura a prueba del 13.06.95 no interrumpió el curso de la prescripción. Asimismo, se quejan de que no se haya obtenido el Libro de Controles Mínimos establecido por la Circular I.F. 135 correspondiente al periodo de las imputaciones formuladas, y que se hubieran considerado suficientes los elementos probatorios existentes en las actuaciones para formar criterio sobre la ocurrencia de los hechos, siendo que la ofrecida por ellos no se encuentra producida; por lo cual, concluyen que no existe prueba suficiente acerca de los incumplimientos reprochados, reiterando conceptos defensivos volcados en los respectivos descargos.

10. Cabe abordar, en principio, el tema de prescripción planteado -no obstante haber sido expuesto "a posteriori" de la etapa de presentación de los descargos, y con motivo del cierre del período probatorio- debiendo destacarse, previamente, que los presupuestos y principios de la materia penal invocados, no resultan de aplicación en este procedimiento sumarial; así lo entendió la jurisprudencia que ha sostenido: ***"Que la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de las otras de carácter comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de ajustarse a disposiciones y al control del Banco Central, una de cuyas funciones es aplicar la ley de bancos y vigilar su cumplimiento; por lo tanto, las sanciones que esta institución puede aplicar tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal"*** (conf. C.S. Fallos, 241:419, 251:343, 268:91, 275:265, 303:1776, entre otros), razón por la cual devienen inaplicables en la especie los principios propios de ese derecho específico.

Con relación al auto de apertura a prueba dictado con fecha 13.06.95, al cual los prevenidos pretenden restarle carácter interruptivo respecto del curso de la prescripción, se impone indicar que los argumentos esgrimidos con tal propósito resultan triviales e insustanciales, toda vez que interrumpe el curso de la prescripción, no sólo la Resolución que ordena la apertura del sumario, (conforme: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala I Contencioso Administrativa, sentencia del 7.10.80, autos "ABERG COBO, Martín Antonio c/Resolución 314/78 del Banco Central"; y Sala 2, causa N° 27.035/95, autos "BANCO ALAS COOPERATIVO LIMITADO (en liquidación) y otros c/Banco Central de la República Argentina. Resol. 154/94", Sentencia del 19.2.98), sino que igualmente lo hacen todas las posteriores diligencias de procedimientos conforme surge de la normativa vigente.

En tal entendimiento se ha expedido la jurisprudencia al expresar que: *"...el más Alto Tribunal ha sostenido que constituyen actos de impulso procesal que interrumpen el curso de la prescripción, entre otros, la providencia que dispone instruir sumario y corre vista a la defensa... (Fallos: 296:531) " y "...el auto de apertura a prueba, cuya entidad interruptiva no puede discutirse tanto por provenir de la autoridad encargada de instruir y tramitar las actuaciones como por constituir un acto necesario para que la resolución a emitirse lo sea con observancia del principio constitucional de defensa en juicio..."* (sentencia del 30.6.2000, expte. N° 34.958/99: "Banco de Mendoza (ACTUALMENTE BANCO DE MENDOZA S.A.) y otros c/BCRA -Res. 286/99 (exp. 100033/87, Sum. Fin. 798", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV).

En efecto, a tenor de lo establecido por el art. 42 de la Ley 21.526 - antepenúltimo párrafo- *"...Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario..."*; debiendo, a su vez, señalarse que ninguna de las normas procedimentales aplicables al sumario establece que cada uno de dichos actos y diligencias posteriores a la apertura sumarial -salvo los casos que resuelvan excepciones expresamente previstas en la normativa vigente- deban ser suscriptos por la máxima autoridad de este Organismo. En tal sentido, resulta oportuno citar el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras que en su parte pertinente prescribe que: *"...Las sanciones serán aplicadas por la autoridad competente, a las personas o entidades o ambas a la vez, que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente, previo sumario que se instruirá con audiencia de los imputados, con sujeción a las normas de procedimientos que establezca la indicada institución..."*; cabiendo señalar que dicho procedimiento se encuentra regulado por la Comunicación "A" 90, RUNOR -1, Capítulo XVII, aplicable al presente sumario a tenor de la época en que se cometieron las infracciones imputadas.

Y salvo los casos expresamente previstos en su punto 1.2.2.2.1. que señala que: *"El sumario se inicia por resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina, quien puede delegar esta facultad para determinados géneros de infracciones"*, y su punto 1.2.2.9. que establece que: *"...Las excepciones opuestas por los prevenidos son decididas en la resolución final, salvo cuando por su naturaleza resulte necesario considerarlas y resolverlas con anterioridad. Estas resoluciones son adoptadas por el Presidente del Banco Central"*, los demás actos y procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario son realizados a través de la estructura funcional de la Superintendencia de Entidades Financieras; advirtiéndose, en concordancia con lo expuesto, que en esta resolución final sancionatoria se dará cuenta motivada del rechazo de la prueba (Comunicación "A" 90 punto 1.2.2.8.1., 2° párrafo). A su vez procede señalar que, a tenor de lo prescripto en el Decreto N° 13/95, art. 2° (con vigencia restablecida por Ley N° 25.780) *"...las menciones del Banco Central de la República Argentina y del Presidente de esa Institución hechas en los artículos 41 y 42 de la Ley N° 21.526, modificados por el artículo 3° de la Ley N° 24.144, deben entenderse referidas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y al Superintendente, respectivamente..."*.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia ha expresado también que: *"...Cuando ninguno de los recurrentes ha sostenido que las presuntas infracciones que se les imputan cesaran de*

cometerse seis años antes de la fecha del dictado de la resolución que dispuso la apertura del sumario, este acto tuvo por efecto inmediato la interrupción del curso de la prescripción de la acción sancionatoria del Banco Central de la República, en los términos del artículo 42 de la ley 21.526. A partir de allí cada acto de impulso del procedimiento administrativo y en especial aquellos emanados de los propios imputados al formular sus descargos tuvo la virtud de interrumpir el curso de la prescripción que se había reiniciado con el dictado de aquella resolución. De allí es que, al momento de ejercer el Banco Central su acción sancionatoria, ella no se encontraba prescripta con relación a cada uno de los aquí recurrentes. (cons. IV) (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4°, 11/09/1997, -Banco Latinoamericano S.A. v. Banco Central de la República Argentina /Resol. 228/92/Causa: 28330/93).

Que, para más, recientemente, la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) ha manifestado que: ***"...cada uno de los actos inherentes a la sustanciación del sumario producen la interrupción del plazo de prescripción por lo que desde cada uno de ellos debería iniciarse nuevamente el cómputo de los 6 años, el que no ha transcurrido en el sub lite..."*** (fallo del 07.02.02, in re "Vidal Mario René c/B.C.R.A.-Resolución N° 150/00", Expediente N° 58.554/87 -Sumario N° 780).

Luego, han interrumpido el curso de la prescripción todos los actos y diligencias posteriores a la apertura sumarial, tales como las notificaciones practicadas, los descargos de los propios sumariados, el auto de apertura a prueba, cada una de las diligencias practicadas a los efectos de su producción, los informes requiriendo elementos probatorios, la agregación a las actuaciones de dichos elementos, el posterior cierre de prueba y su traslado; razón por la cual, la presente acción sumarial no se encuentra prescripta.

11. En cuanto a la falta de prueba argüida por los encartados, en razón de no haberse agregado a las actuaciones el Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación de los mismos, es del caso destacar que las deficiencias reprochadas respecto de dichos controles, las cuales fueran detalladamente descriptas en la pieza acusatoria, fueron en su oportunidad detectadas y extraídas textualmente del mencionado libro; debiendo advertirse que las aludidas carencias, si bien fueron tildadas por los incoados de irregularidades meramente formales, fueron en forma implícita reconocidas, pretendiendo, además, restarle importancia a esa falta de constancias en el libro respectivo.

Así lo ha expresado el señor AGUILERA en su descargo de fs. 522/25 al decir que: " Con relación al punto 1.2.4., aparte de que si bien pudieron no haberse registrado vía I.F. 135 ..." "Con relación a los controles semestrales (punto 1.3.3.)..." "...por lo cual incluirlas en las actas de la I.F. 135 no era más que una redundante formalidad y una injustificada e inocua repetición de tareas..." "Con relación a los controles anuales (punto 1.4.1.)..." "La omisión aludida en este punto no tuvo efectos perjudiciales..." "Pudo haberse omitido la formalidad de asentar lo actuado en el libro de Actas de la I.F. 135..." "la omisión en que se incurrió, en modo alguno tuvo incidencia..." (sic.). Por su parte el señor VIEL, en su defensa de fs. 310/11 también alude a "...la presunta inexistencia de constancias sobre los mismos..." (sic.). Y, el señor GIOSA en su descargo de fs. 317/19, expresa que: "...las presuntas infracciones aludidas en este cargo, se vinculan con hechos formales..." (sic.). Pero la prueba definitivamente irrefutable de las deficiencias constitutivas de las anomalías imputadas surge del expreso reconocimiento de quien tenía a su cargo -por delegación de funciones- la realización de los controles mínimos, es decir del propio auditor externo. En tal sentido el encartado Juan Oscar GARCIA GARZON (fs.298/309) ha sostenido acerca de dichos controles que "...equivocadamente, se omitió transcribirlos en actas..." "El hecho de no haberlos registrado en actas..." "Incluir en actas de la Circular I.F. 135 la mención de los mismos no habría sido más que una inútil y reiterativa formalidad..." "la no inclusión de tales informes en las actas de la circular mencionada era una omisión que en nada perjudicó..." (sic.).

12. Sobre el tratamiento de la cuestión de fondo, en tanto y en cuanto los aludidos argumentos de los descargos pretenden atacar los fundamentos fáctico-normativos de la incriminación reprochada, y sin perjuicio de los conceptos expresados precedentemente, procede enviar al análisis y fundamentación realizado en el precedente párrafo 5.2., correspondiendo, asimismo, dar por reproducido el anterior punto 5., relacionado con la acreditación del ilícito.

No obstante lo expuesto, en cuanto a la falta de voluntad dolosa y de perjuicio, argüido por los prevenidos respecto de los hechos que se les reprochan, es de indicar que dichos argumentos resultan irrelevantes, tanto en lo que hace a la configuración infraccional, cuanto a los efectos de la atribución de responsabilidad.

13. Con referencia a la especial participación que se imputa a los encartados en la comisión de las irregularidades, se impone poner de resalto que, en la especie, aquélla resulta de imposible configuración, toda vez que la intervención personal de los prevenidos, proviene -en virtud de la particularidad del ilícito bajo análisis- de una específica obligación de hacer que, por imperativo legal, recae sobre ellos.

Así, la obligación de realizar los controles mínimos es impuesta en cabeza del Directorio por la Circular I.F. 135, la cual permite -a su vez- que dichos controles puedan ser realizados mediante la utilización de servicios de auditoría externa. Es decir, que frente a un deficiente cumplimiento, las personas obligadas siempre tendrán -cuando actúan por sí- necesariamente una material intervención. En cambio no podría configurarse el agravante si, como sucedió en este caso, se ha delegado la realización de los controles mínimos. Por ello, no cabe endilgar a los imputados la especial participación que se les reprocha.

14. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben a los sumariados, se impone resaltar que los hechos infraccionales reprochados no son manifiestamente extraños a su alcance.

15. La conducta de los directivos -tal como lo sostiene la jurisprudencia- trae aparejadas las consecuencias previstas por el art. 41 de la Ley N° 21.526, en tanto se verifique una infracción a las normas vigentes, con prescindencia de los perjuicios materiales que el obrar ilícito pudiera ocasionar y de las formas de culpabilidad que se apliquen para la consumación de las irregularidades (Cfr. fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dictado en autos "BANCO OBERÁ COOP. LTDO. s/sumario", Causa N° 4105 del 30.9.83).

En sentido similar se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fallos del 28.9.84 -Sala I- Causa 2795, autos "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/Resolución N° 456/81 Banco Central (Considerando II) y del 31.10.85 -Sala III-, causa N° 9463, autos "Argemofin Cía. Financiera s/apelación Resolución 88/85 B.C.R.A. (Considerando VII)" al dejar sentado que la responsabilidad se genera por la mera constatación de faltas, resultando indiferente la existencia de dolo, pues las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión.

Con referencia a la reserva de derechos para efectuar planteos de inconstitucionalidad, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

16. Que, en consecuencia, los sumariados no han demostrado haber sido ajenos a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas, en tanto los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135 -que se encontraba en cabeza de los directores- fueron delegados a los auditores externos, y habiéndose evidenciado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debieron extremar para garantizar su efectivo cumplimiento, procede

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	17
----------	--	----



atribuir responsabilidad a cada uno de los señores Adolfo Melitón AGUILERA, Enrique Alfredo VIEL y Edgardo Rubén GIOSA por el cargo 5), debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar, sus menores períodos de actuación en relación al lapso infraccional de la imputación.

17. Prueba: La propuesta por los sumariados y que fuera proveída según surge del pertinente auto de apertura a prueba obrante a fs. 624/26, fue producida a tenor de las constancias obrantes a fs. 660 subfs. 2; hallándose agregados como ANEXOS sin acumular los instrumentos documentales (según surge de fs. 778) consistentes en los Libros de Actas de Directorio Nros. 3 y 4, de Actas de Asambleas N° 1, de Actas de la Comisión Fiscalizadora N° 1, Controles mínimos Circular I.F. 135, y de Inventarios y Balances N° 9; los cuales han sido evaluados adecuadamente.

Respecto de aquella prueba admitida que, a la postre, resultara de imposible producción (Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación de los prevenidos -fs. 778-), cabe advertir que, toda vez que la falta de esa prueba en las actuaciones no impide la sustanciación sumarial, puesto que no aparece con virtualidad suficiente para controvertir los hechos infraccionales, debido al cúmulo de evidencias instrumentales que fundamentan tanto las anomalías objeto del presente sumario cuanto la atribución de responsabilidades, deviene aquella carencia en una cuestión irrelevante.

III. Roberto José ESTRADA (Director Titular, 27.04.84/06.12.84 y Presidente, 06.12.84/28.06.85).

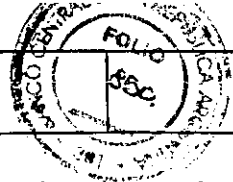
18. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Roberto José ESTRADA, a quien se le imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario; debiendo ponderarse, con relación al ilícito 2), que el imputado era destinatario de los fondos correspondientes a liquidaciones irregulares de operaciones crediticias, autorizaba dichas operaciones y compartía las órdenes pertinentes, y respecto de la infracción 5), su especial participación en los hechos configurantes por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en su condición de miembro del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

19. Habiéndose cursado al sumariado la notificación de la apertura sumarial, no obstante hallarse notificado en dos direcciones distintas (ver avisos de recibo de fs. 277 y 575) pero, a su vez, con resultado negativo otros intentos de notificación a tenor de las devoluciones de las piezas postales por parte de Encotel, obrantes a fs. 592 y 614, se realizó una nueva notificación por medio de publicación de edicto en el Boletín Oficial (fs. 615/16) sin que el encausado haya tomado vista de las actuaciones ni presentado descargo (fs. 622/23).

Atento a su inactividad procesal, la conducta del prevenido será evaluada a la luz de los elementos de juicio obrantes en el expediente y sin que esa inacción constituya presunción en su contra.

20. Acerca del tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de las infracciones objeto de las imputaciones, procede enviar al análisis y fundamentación realizados en los puntos 1., 2., 3., 4., y 5., -y sus respectivos subpuntos- del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

21. Con referencia a la especial participación que se imputa al encartado en la comisión de la irregularidad 5), cabe enviar a los conceptos volcados en el precedente punto 13. en donde ha sido considerada la improcedencia de dicho agravante.



22. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben al sumariado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 14. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 15.

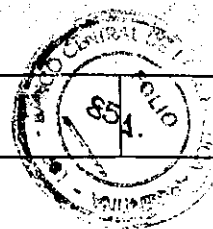
Sin perjuicio de ello, procede dejar constancia que el incoado tuvo intervención personal en los hechos configurantes del cargo 2), en tanto de las actas que lucen a fs. 214/5 y 228 se desprende que el señor ESTRADA era destinatario de los fondos correspondientes a liquidaciones irregulares de operaciones crediticias, autorizaba dichas operaciones y compartía las órdenes pertinentes (ver también fs. 12, punto 6.1. subpunto 4.); asimismo, respecto de alguno de los hechos constitutivos del cargo 4), cabe advertir que el sumariado se benefició económicamente y también tuvo intervención personal al acceder a la percepción de honorarios durante el mes de mayo de 1985, conforme consta a fs. 10, sin que la entidad hubiera presentado el plan de adecuación al que estaba obligada; circunstancias que serán tenidas en cuenta al momento de calcularse la sanción a imponer.

23. Que, en consecuencia, el encartado no ha demostrado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, por lo cual procede atribuir responsabilidad al señor Roberto José ESTRADA por los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) y, con relación a esta última imputación *-en tanto los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135, que se encontraban en cabeza de los directores, fueron delegados a los auditores externos-* por haber mediado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debió extremar para garantizar su efectivo cumplimiento; debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar, su intervención personal en los hechos configurantes del ilícito 2), su beneficio económico e intervención personal en los hechos constitutivos del ilícito 4), como así también su menor período de actuación respecto del cargo 5).

IV. Alberto Ernesto COMINELLI (Director Titular, 27.04.84/06.12.84 y Vicepresidente 1°, 06.12.84/17.05.85).

24. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Alberto Ernesto COMINELLI, a quien se le imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario, debiendo señalarse que se le achacan la incriminaciones durante el ejercicio de sus funciones directivas, atribuyéndosele, además, especial participación en los hechos configurantes del cargo 5) por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en su condición de miembro del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

25. A fs. 546/50 el sumariado manifiesta en su defensa que el nuevo presidente Roberto José ESTRADA efectuaba un manejo casi "unipersonal" de la entidad, por lo cual debió dejar sentada su votación en disidencia en actas, efectuar planteos para reorganizar la empresa y definir competencias; asimismo, pretende justificar las fallas administrativas que, a su entender, determinaron las anomalías reprochadas. En particular, respecto del cargo 1) intenta trasladar la responsabilidad hacia las áreas administrativa, contable y de control de la Compañía; con relación al ilícito 2) remite a lo expresado acerca del manejo crediticio que efectuaba del Sr. Estrada, aludiendo específicamente a los préstamos otorgados a la firma S.A. Sol Explotación de Petróleo; respecto del cargo 3) señala que los hechos irregulares al final del período infraccional *-se advierte aquí que el sumariado parcializa la consumación de los hechos configurantes del ilícito-* se produjeron con posterioridad a su desvinculación; acerca de la anomalía 4) manifiesta que en virtud del lapso infraccional no resulta alcanzado por ella; y, en cuanto a la irregularidad 5) argumenta que los controles mínimos a cargo del Directorio fueron delegados a los auditores externos. En conclusión,



solicita se lo exima de toda responsabilidad.

Finalmente hace reserva de plantear el caso federal.

26. Al respecto, cabe destacar en primer término que a tenor de las constancias obrantes en el Libro Copiador Actas de Directorio N° 4 (A 3174) durante el período señalado por el propio imputado (presidencia del Sr. Estrada), lejos de surgir de las Actas labradas en las reuniones de Directorio, concretas oposiciones a medidas tomadas por dicho órgano o constancias de haberse dejado a salvo opiniones en contrario respecto de los hechos infraccionales que dieron motivo al presente sumario, las mencionadas Actas aparecen casi en su totalidad aprobadas por unanimidad por parte de los miembros firmantes, entre quienes se encuentra el señor COMINELLI.

Específicamente con relación al cargo 2) es de indicar que, no obstante la intervención personal que el señor Roberto José ESTRADA pudo haber tenido en la configuración infraccional, dicha circunstancia no puede eximir de responsabilidad al prevenido COMINELLI debido a la omisión complaciente evidenciada frente a los hechos anómalos reprochados; debiendo, asimismo, destacarse que la mencionada imputación se encuentra constituida, además de los créditos invocados por el sumariado, por un cúmulo de diferentes operaciones en materia de política crediticia, amén de otros hechos relacionados con la conformación de legajos de deudores y la constitución de previsión por riesgo de incobrabilidad, descriptos en el informe acusatorio.

En lo que hace a la infracción 3), en tanto sus hechos se tienen por configurados al 17.6.85, y dado que el prevenido a esa fecha no se encontraba en ejercicio de su cargo directivo, no resulta comprendido por esa imputación. En cuanto al cargo 4) cabe señalar que en razón de que el sumariado fue desvinculado de la entidad con fecha 17.05.85, es decir, en la misma fecha en que tuvo comienzo el lapso infraccional de dicho ilícito -desde el 17.5.85 hasta el 28.6.85- el señor Alberto Ernesto COMINELLI tampoco es alcanzado por ella.

Respecto del ilícito 5) cabe indicar que la delegación por parte del Directorio de los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135, en modo alguno puede eximir de responsabilidad a los miembros del órgano directivo por la falta de realización o la deficiente práctica de dichos controles; toda vez que en estos casos se debe extremar la vigilancia personal para garantizar su efectivo cumplimiento, puesto que estas específicas funciones, por imperio normativo, son puestas en cabeza de los directores más allá de la delegación que puedan efectuar.

27. Acerca el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de las infracciones objetos de las imputaciones, procede enviar al análisis y fundamentación realizados en los puntos 1., 2., y 5., -y sus respectivos subpuntos- del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

28. Con referencia a la especial participación que se imputa al encartado en la comisión de la irregularidad 5), cabe enviar a los conceptos volcados en el precedente punto 13. en donde ha sido considerada la improcedencia de dicho agravante.

29. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben al sumariado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 14. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 15.

Con relación a la reserva del caso federal, no corresponde a esta instancia expedirse sobre ese particular.

30. Que, en consecuencia, el encartado no ha demostrado haber sido ajeno a

los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, por lo cual procede atribuir responsabilidad al señor Alberto Ernesto COMINELLI por los cargos 1), 2), y 5), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas de a tenor de lo arriba referido, y, con relación a esta última imputación *-en tanto los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135 -que se encontraba en cabeza de los directores- fueron delegados a los auditores externos-* por haber mediado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debió extremar para garantizar su efectivo cumplimiento; debiendo ponderarse a lo efectos de la graduación de la sanción a aplicar, su menor período de actuación respecto de las anomalías 2) y 5); y, en virtud de las razones expuestas en el párrafo tercero del precedente punto 26., absolverlo por los ilícitos 3) y 4).

31. Prueba: ha sido considerada de acuerdo con el siguiente detalle:

31.1. Con relación a la *Instrumental* ofrecida como punto 1) (fs. 549 vta.) consistente en la totalidad de la documentación glosada en el expediente, la misma ha sido convenientemente evaluada.

31.2. Con referencia a la propuesta también a fs. 549 vta. como punto 2) de la *Instrumental* -Legajo personal y antecedentes bancarios del prevenido-, como asimismo respecto de la *Pericial Contable*, a tenor de la generalidad de la materia pericial solicitada, procede el rechazo de dichas medidas puesto que no resultan aptas para desvirtuar las constancias probatorias obrantes en la causa, tanto en lo que hace a la acreditación de los hechos infraccionales reprochados, cuanto a la atribución de responsabilidades derivadas de su comisión.

V. Luis Pedro PICCHI (Vicepresidente 2°, 06.12.84/28.06.85).

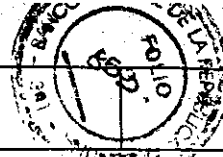
32. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Luis Pedro PICCHI, a quien se le imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario, debiendo destacarse que se le achacan la incriminaciones durante el ejercicio de sus funciones directivas, atribuyéndosele, además, especial participación en los hechos configurantes del ilícito 5) por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en su condición de miembro del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

33. Habiéndose cursado al sumariado la notificación de la apertura sumarial con resultado negativo (fs. 288 y 591), se realizó una nueva notificación por medio de publicación de edicto en el Boletín Oficial (fs. 615/16) sin que el encausado haya tomado vista de las actuaciones ni presentado descargo (fs. 622/23).

Atento a su inactividad procesal, la conducta del prevenido será evaluada a la luz de los elementos de juicio obrantes en el expediente y sin que esa inacción constituya presunción en su contra.

34. Acerca el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de las infracciones objetos de las imputaciones, procede enviar al análisis y fundamentación realizados en los puntos 1., 2., 3., 4., y 5., *-y sus respectivos subpuntos-* del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

35. Con referencia a la especial participación que se imputa al encartado en la comisión de la irregularidad 5), cabe enviar a los conceptos volcados en el precedente punto 13. en donde ha sido considerada la improcedencia de dicho agravante.



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	21
----------	--	----

36. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben al sumariado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 14. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 15.

37. Que, en consecuencia, el encartado no ha demostrado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, por lo cual procede atribuir responsabilidad al señor Luis Pedro PICCHI por los cargos 1), 2), 3), 4), y 5), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas a tenor de lo arriba referido y, con relación a esta última imputación *-en tanto los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135 -que se encontraba en cabeza de los directores- fueron delegados a los auditores externos-* por haber mediado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debió extremar para garantizar su efectivo cumplimiento; debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar su menor período de actuación con relación al ilícito 5).

VI. Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA (Director, 06.12.84/ 07.05.85).

38. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA, a quien se le imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario, debiendo destacarse que se le achacan la incriminaciones durante el ejercicio de sus funciones directivas, atribuyéndosele, además, especial participación en los hechos configurantes del ilícito 5) por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en su condición de miembro del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

39. Habiéndose cursado al sumariado la notificación de la apertura sumarial con resultado negativo (fs. 289, 576, 603 y 606), se realizó una nueva notificación por medio de publicación de edicto en el Boletín Oficial (fs. 615/16) sin que el encausado haya tomado vista de las actuaciones ni presentado descargo (fs. 622/23).

Atento a su inactividad procesal, la conducta del prevenido será evaluada a la luz de los elementos de juicio obrantes en el expediente y sin que esa inacción constituya presunción en su contra.

40. Acerca el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de las infracciones objetos de las imputaciones, procede enviar al análisis y fundamentación realizados en los puntos 1., 2., y 5., *-y sus respectivos subpuntos-* del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

En lo que hace a la infracción 3), en tanto sus hechos se tienen por configurados al 17.6.85, y dado que el prevenido a esa fecha no se encontraba en ejercicio de su cargo directivo, no resulta comprendido por esa imputación. En cuanto al cargo 4) cabe señalar que en razón de que el sumariado fue desvinculado de la entidad con fecha 07.05.85, es decir, con anterioridad a la fecha en que tuvo comienzo el lapso infraccional de dicho ilícito *-desde el 17.5.85 hasta el 28.6.85-* el señor Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA tampoco es alcanzado por ella.

41. Con referencia a la especial participación que se imputa al encartado en la comisión de la irregularidad 5), cabe enviar a los conceptos volcados en el precedente punto 13. en donde ha sido considerada la improcedencia de dicho agravante.

42. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben al sumariado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 14. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 15.

43. Que, en consecuencia, el encartado no ha demostrado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, por lo cual procede atribuir responsabilidad al señor Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA por los cargos 1), 2), y 5), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas a tenor de lo arriba referido y, con relación a esta última imputación -en tanto los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135 -que se encontraba en cabeza de los directores- fueron delegados a los auditores externos- por haber mediado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debió extremar para garantizar su efectivo cumplimiento; debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar su menor período de actuación con relación a los ilícitos 2), y 5).; y, en virtud de lo expuesto en el segundo párrafo del precedente punto 40., absolverlo por los cargos 3), y 4).

VII. Guillermo Esteban COPPOLA (Director, 02.05.85/28.06.85).

44. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Guillermo Esteban COPPOLA, a quien se le imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario, debiendo destacarse que se le achacan la incriminaciones durante el ejercicio de sus funciones directivas, atribuyéndosele, además, especial participación en los hechos configurantes del ilícito 5) por tratarse de obligaciones expresamente asignadas en su condición de miembro del Directorio, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

45. En su presentación de fs. 539/42 el sumariado realiza un planteo de nulidad de la notificación que se le practicara, solicitando, a su vez, que se le efectuara otro traslado de la apertura sumarial a su actual domicilio real, planteo que fuera admitido, en cuya virtud se le volvió a librar nueva nota de notificación tal como lo solicitara el señor COPPOLA (fs. 563 y 574).

En consecuencia, hallándose luego el nombrado correctamente notificado, presenta el descargo que luce a fs. 577/83. En su defensa el prevenido manifiesta que, debido al escaso período en que le tocó actuar, no ha tenido casi intervención en el manejo de los negocios de la entidad. También alega que muchos de los hechos configurantes de alguno de los cargos reprochados se produjeron con anterioridad a la fecha en que asumiera sus funciones directivas, razón por la cual sostiene que no puede caberle ninguna responsabilidad por las infracciones imputadas.

46. Acerca el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de las infracciones objetos de las imputaciones, procede enviar al análisis y fundamentación realizados en los puntos 1., 2., 3., 4., y 5., -y sus respectivos subpuntos- del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

En lo que respecta a las imputaciones 1), y 5) cabe señalar que, en razón de que el sumariado asumió el cargo de director con fecha 02.05.85, es decir, con posterioridad a los lapsos infraccionales en que se consumaron los mencionados ilícitos, el señor Guillermo Esteban COPPOLA no resulta alcanzado por ellas. Y, en lo que respecta a los cargos 2) -cuya consumación se extendió hasta el 28.06.85- deberá ponderarse su menor período de actuación con relación a dicha anomalía, en oportunidad de determinarse su grado de responsabilidad por tales hechos.

47. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben al encartado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 14. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 15



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	23
----------	--	----

48. Que, en consecuencia, el prevenido no ha demostrado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, por lo cual procede atribuir responsabilidad al señor Guillermo Esteban COPPOLA por los cargos 2), 3), y 4), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas a tenor de lo arriba referido; debiendo ponderarse a lo efectos de la graduación de la sanción a aplicar su beneficio económico e intervención personal en los hechos constitutivos del ilícito 4), como así también su menor período de actuación con relación a la imputación 2); y, en virtud de lo expuesto en el segundo párrafo del precedente punto 46. absolverlo por los ilícitos 1) y 5).

49. Prueba: ha sido considerada de acuerdo con el siguiente detalle:

49.1. La prueba *documental* oportunamente ofrecida por el prevenido a fs. 582 - punto 1)- se encuentra acompañada al expediente y glosada a fs. 710/777, la cual ha sido convenientemente ponderada.

49.2. Con relación a la *testimonial* propuesta como punto 2) -fs. 582- procede su desestimación por las razones expuestas en auto de apertura a prueba de fs. 624/26.

VIII. Daniel José VIGO (Síndico, 29.03.83/06.12.84).

50. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Daniel José VIGO, a quien se le imputa el cargo 5) formulado en el presente sumario, destacándose que se le achaca la incriminación durante el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

51. En su descargo que luce a fs. 313/14, el prevenido manifiesta que en ningún momento dejó de cumplir las obligaciones que le correspondían; sostiene que ninguna acción u omisión suya ha perjudicado a la compañía y que, además, no ha existido en su proceder intencionalidad subjetiva que pudiera haber causado daño o perjuicio a la entidad.

Con relación al tema de fondo, el incoado ha efectuado ciertos cuestionamientos insustanciales con los que pretende demostrar la inexistencia de irregularidades respecto del cargo formulado; argumentos que son los vertidos en el anterior punto 5.1., al cual cabe remitirse en honor a la brevedad y que fueron apropiadamente analizados y refutados.

Finalmente hace reserva de su derecho a impugnar por inconstitucional la ley 21.526, por fijar plazos de prescripción mayores a los establecidos para delitos tipificados en el Código Penal.

Por otra parte, a fs. 810 subfs. 1/4 el sumariado efectúa una presentación a modo de alegato, con motivo del cierre de la etapa probatoria, en la cual plantea una excepción de prescripción sobre la base de la aplicación de principios e instituciones que son propios del derecho penal; argumentando, a su vez, que el auto de apertura a prueba del 13.06.95 no interrumpió el curso de la prescripción. Asimismo, se queja de que no fuera agregado el Libro de Controles Mínimos establecido por la Circular I.F. 135 correspondiente al período de las imputaciones formuladas, y que se hubieran considerado suficientes los elementos probatorios existentes en las actuaciones para formar criterio sobre la ocurrencia de los hechos, siendo que la ofrecida por él no se encuentra producida; por lo cual, concluye que no existe prueba suficiente acerca de los incumplimientos reprochados, reiterando conceptos defensivos volcados en su descargo.

52. Con respecto al planteo de prescripción efectuado y con relación a la falta

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 101.552/85 Act.	24
----------	--	----

de prueba argüida en razón de no haberse agregado a las actuaciones el Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación del prevenido, procede remitirse a lo expuesto en los precedentes puntos 10. y 11. en donde han sido rebatidos los argumentos y planteos invocados.

53. Sobre el tratamiento de la cuestión de fondo, en tanto y en cuanto los aludidos argumentos del descargo intentan atacar los fundamentos fáctico-normativos de la incriminación reprochada, no obstante lo expuesto en el punto que antecede cabe enviar al análisis y fundamentación realizados en el precedente párrafo 5.2., correspondiendo, asimismo, dar por reproducido el anterior punto 5., relacionado con la acreditación del ilícito.

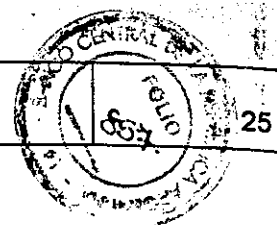
No obstante lo expuesto, en cuanto a la falta de voluntad dolosa y de daño, argüido por el prevenido respecto de los hechos que se le reprochan, es de indicar que dichos argumentos resultan irrelevantes, tanto en lo que hace a la configuración infraccional, cuanto a los efectos de la atribución de responsabilidad.

54. En lo que hace a la función específica de la fiscalización privada, es de resaltar que también en esa órbita existen exclusivas obligaciones propias del ejercicio de esa función, cuales son las de vigilar y controlar que los actos del órgano de administración encuadren dentro de la normativa vigente y utilizar los mecanismos legales a su alcance, en caso de resultar necesario; en la especie, para hacer cesar las conductas indebidas.

55. Sobre este particular, la jurisprudencia ha tenido oportunidad de pronunciarse sosteniendo que: *"la obligación principal (de los síndicos) ... es exigir que los negocios sociales se ajusten estrictamente a la normativa financiera vigente, apelando a las facultades que la ley les otorga para obtener el correcto cometido de su deber primordial, esto es, el control de legalidad de la actividad de la empresa que fiscalizan"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 4, en autos "PAM CIA. FINANCIERA (en liquidación) s/instrucción de sumario a personas físicas", fallo del 31.5.82).

En consonancia con lo expresado se ha establecido que: *"Las funciones que establece la ley respecto de la sindicatura, tienden -a más de salvaguardar el patrimonio de la sociedad- a constituir garantía de una correcta gestión y a tutelar el interés público (doctrina de esta Sala in re "Bunge Guerrico", del 3.5.84 y "Banco Internacional" del 5.7.84). Las atribuciones que enumera el art. 294 de la Ley de Sociedades importan para aquél la obligación de ejercerlas a fin de asegurar el buen desempeño de la fiscalización que le ha sido encomendada; así deberá vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatutos, reglamentos y decisiones asamblearias (conf. inc. 9, art. citado), lo que importa el control de legitimidad que, como en el caso debe extenderse a los requisitos derivados de la ley de entidades financieras y sus normas complementarias. Para el mejor cumplimiento puede asistir a las reuniones del directorio... e informarse aún de los hechos acaecidos en ejercicios anteriores a su elección (conf. art. 295 Ley de Sociedades). Es decir que a tenor de las normas citadas resulta atribuido a la sindicatura no sólo un control en el sentido estricto al que aluden los recurrentes, sino también, una vigilancia que va mucho más allá de las meras verificaciones contables y una responsabilidad condigna (id. arts. 296 y 297..." (entre otras, sentencia del 4.7.86 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dictada en la causa N° 7129, autos "Perez Alvarez, Mario A. c/Res. 402/83 Bco. Central").*

Luego, en tanto se ha evidenciado el incumplimiento de los deberes y obligaciones del incoado, como titular del órgano fiscalizador, quien tampoco se ha presentado a demostrar haber puesto reparos a los incumplimientos incriminados, llevados a cabo por los directores, se pone de manifiesto su conducta omisiva complaciente que ha permitido la



configuración de las transgresiones imputadas, por lo que le cabe reproche.

Con referencia a la reserva de derechos para efectuar planteos de inconstitucionalidad, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

56. Que, en consecuencia, el sumariado no ha demostrado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance; así, habiendo mediado una conducta omisiva complaciente respecto de la vigilancia personal que debió extremar para garantizar el efectivo cumplimiento a las prescripciones legales, procede atribuir responsabilidad al señor Daniel José VIGO por el cargo 5), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones fiscalizadoras a tenor de lo arriba referido, debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar, su menor período de actuación en relación al lapso infraccional de la imputación.

57. Prueba: La propuesta por el sumariado y que fuera proveída según surge del pertinente auto de apertura a prueba obrante a fs. 624/26, fue producida a tenor de las constancias obrantes a fs. 660 subfs. 2; hallándose agregados como ANEXOS sin acumular los instrumentos documentales (según surge de fs. 778) consistentes en los Libros de Actas de Directorio Nros. 3 y 4, de Actas de Asambleas N° 1, de Actas de la Comisión Fiscalizadora N° 1, Controles mínimos Circular I.F. 135, y de Inventarios y Balances N° 9; los cuales han sido evaluados adecuadamente.

Respecto de aquella prueba admitida que, a la postre, resultara de imposible producción (Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación de los prevenidos -fs. 778-), cabe advertir que, toda vez que la falta de esa prueba en las actuaciones no impide la sustanciación sumarial, puesto que no aparece con virtualidad suficiente para controvertir los hechos infraccionales, debido al cúmulo de evidencias instrumentales que fundamentan tanto las anomalías objeto del presente sumario cuanto la atribución de responsabilidades, deviene aquella carencia en una cuestión irrelevante.

IX. Benjamín SZPAYZER (Síndico, 29.03.83/28.06.85), **Juan Jorge Guido TROYER** (Síndico, 06.12.84/28.06.85) y **Luis Alejandro CARDOSO** (Síndico, 06.12.84/28.06.85).

58. Que la situación de los sumariados mencionados en el epígrafe será tratada en forma conjunta en razón de haber desempeñado iguales roles fiscalizadores, durante idénticos períodos de actuación -salvo para el señor SZPAYZER que lo alcanza todo el período infraccional- y en virtud de haber sido inculcados por los mismos cargos, sin perjuicio de señalarse las diferencias que presente cada caso, fundamentalmente el menor período de actividad de los señores TROYER y CARDOSO.

En tal sentido, cabe esclarecer la eventual responsabilidad de los nombrados a quienes se les imputan los cargos 1), 2), 3), 4), y 5) formulados en el presente sumario, destacándose que se le achacan la inculcaciones durante el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

59. En sus respectivos descargos, obrantes a fs. 320/32, 421/33 y 607/10 (el señor CARDOSO a su vez remite a las defensas de SZPAYZER y TROYER), los encartados -con similares argumentos- manifiestan que en su calidad de síndicos han cumplido siempre con sus obligaciones, al tiempo que transcriben doctrina y jurisprudencia vinculadas a los deberes propios del órgano de fiscalización; también sostienen, en particular respecto del cargo 3), que la responsabilidad por dichas irregularidades fueron asumidas por el Presidente de entidad y, acerca

del ilícito 5) expresan que los incumplimientos de los controles estaban a cargo del directorio, no existiendo por lo tanto, acción u omisión indebida por parte de la comisión fiscalizadora; al tiempo que señalan que dicha comisión actuó diligentemente con el propósito de solucionar los problemas de iliquidez por los que atravesaba la entidad, lo que se evidenciaría a través de diversas actas y notas dirigidas al órgano directivo y a esta Institución, cuyas copias son adjuntadas por los encartados SZPAYZER y TROYER en sus pertinentes descargos, y que lucen agregadas a fs. 333/420 y 434/520.

Finalmente efectúan reserva de plantear el caso federal.

Por otra parte, los sumariados SZPAYZER y TROYER a fs. 820 subfs. 1/8 y fs. 814 subfs. 1/8, respectivamente, efectúan presentaciones a modo de alegato, con motivo del cierre de la etapa probatoria, en las cuales plantean una excepción de prescripción sobre la base de la aplicación de principios e instituciones que son propios del derecho penal; argumentando, a su vez, que el auto de apertura a prueba del 13.06.95 no interrumpió el curso de la prescripción. Asimismo, se quejan de que no fuera agregado el Libro de Controles Mínimos establecido por la Circular I.F. 135 correspondiente al lapso infraccional de la anomalía 5), y que se hubieran considerado suficientes los elementos probatorios existentes en las actuaciones para formar criterio sobre la ocurrencia de sus hechos configurantes, siendo que la ofrecida por ellos no se encuentra producida; por lo cual, concluyen que no existe prueba suficiente acerca de dichos incumplimientos. Asimismo, se quejan de la falta de producción de la restante prueba ofrecida por los encartados, a través de la cual pretenden desvirtuar la existencia de los ilícitos imputados, reiterando los conceptos defensivos volcados en sus respectivos descargos.

60. Con respecto al planteo de prescripción efectuado y con relación a la falta de prueba argüida en razón de no haberse agregado a las actuaciones el Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación de los prevenidos, procede remitirse a lo expuesto en los precedentes puntos 10. y 11. en donde han sido rebatidos los argumentos y planteos invocados. Asimismo, con relación a la falta de producción de alguna de las pruebas ofrecida por los encartados, cabe enviar "infra" al punto 65., en donde fuera tratada la materia probatoria; no obstante ello, es de indicar que la documentación oportunamente adjuntada por los prevenidos en sus respectivas defensas ha sido tenida por válida, por lo cual no resulta necesario contar con sus respectivos originales; debiendo advertirse, también, que dichos instrumentos documentales han sido convenientemente ponderados.

61. Con referencia a la cuestión de fondo, el sumariado ha realizado ciertos cuestionamientos insustanciales con los que intenta demostrar la inexistencia de hechos infracciones respecto de los cargos 1), 2), y 4); argumentos que son los volcados en el precedente punto 1.1., 2.1., y 4.1. a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad y que fueron adecuadamente analizados y refutados.

62. Sobre el tratamiento de la materia infraccional, en tanto y en cuanto los aludidos argumentos del descargo intentan atacar los fundamentos fáctico-normativos de las incriminaciones reprochadas, cabe enviar al análisis y fundamentación realizados *ut supra* en los anteriores párrafos 1.2., 2.2., y 4.2. del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados, correspondiendo, asimismo, dar por reiterados los precedentes puntos 3. y 5., relacionados con la acreditación de los ilícitos.

63. En orden a la determinación de las responsabilidades que caben a los encartados, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 54. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 55.

Al respecto, y con relación a la diversa documentación adjuntada a fs. 333/420, y 434/521, a través de las cuales los prevenidos intentan demostrar que sus actuaciones como miembros de la comisión fiscalizadora fueron diligentes y acordes con sus obligaciones, procede advertir, según surge de los aludidos instrumentos acompañados y, asimismo, de sus propias manifestaciones, que las indagaciones y observaciones que pudieron haber efectuado en el desempeño de sus cargos, se refieren exclusivamente a la situación de iliquidez por la que atravesaba la entidad, pero en ningún momento aparece comprobada una acción cierta y efectiva de parte de los encartados tendientes a contrarrestar, revertir o denunciar los hechos infraccionales constitutivos de cada una de las imputaciones reprochadas.

Luego, en tanto se ha evidenciado el incumplimiento de los deberes y obligaciones de los incoados, como titulares del órgano fiscalizador, quienes no se han presentado a demostrar haber puesto reparos a los incumplimientos incriminados llevadas a cabo por la entidad a través del órgano directivo, se pone de manifiesto sus conductas omisivas complacientes que han permitido la configuración de las transgresiones imputadas, por lo que les cabe reproche.

Con referencia a la reserva del caso federal planteado, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

64. Que, en consecuencia, no habiendo demostrado los sumariados haber sido ajeno a los hechos configurantes de las infracciones reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, procede atribuir responsabilidad a los señores Benjamín SZPAYZER, Juan Jorge Guido TROYER, y Luis Alejandro CARDOSO, por los cargos 1), 2), 3), 4), y 5), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones fiscalizadoras a tenor de lo arriba referido; debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar a Benjamin SZPAYZER y Jorge Guido TROYER sus intervenciones personales y beneficio económico obtenido respecto del cargo 4), como así también corresponde evaluarse los menores períodos de actuación de Juan Jorge Guido TROYER y Luis Alejandro CARDOSO con relación al ilícito 5).

65. Prueba: ha sido considerada de acuerdo con el siguiente detalle:

65.1. La propuesta por los sumariados y que fuera proveída según surge del pertinente auto de apertura a prueba obrante a fs. 624/26, fue producida a tenor de las constancias obrantes a fs. 660 subfs. 2, y fs. 661/709; hallándose agregados como ANEXOS sin acumular los instrumentos documentales (según surge de fs. 778) consistentes en los Libros de Actas de Directorio Nros. 3 y 4, de Actas de Asambleas N° 1, de Actas de la Comisión Fiscalizadora N° 1, Controles mínimos Circular I.F. 135, y de Inventarios y Balances N° 9; teniéndose, a su vez, por válida cada uno de los documentos acompañados oportunamente por los prevenidos; prueba que en su totalidad ha sido evaluada adecuadamente.

Respecto de aquella prueba admitida que, a la postre, resultara de imposible producción (*Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135* correspondiente al período de actuación de los prevenidos -fs. 778- e *Inventario, Balance Gral. y Estados Contables al 30/6/85* -fs. 660 subfs. 2- no volcado al libro respectivo), cabe advertir que, toda vez que la falta de esa prueba en las actuaciones no impide la sustanciación sumarial, puesto que no aparece con virtualidad suficiente para controvertir los hechos infraccionales, debido al cúmulo de evidencias instrumentales que fundamentan tanto las anomalías objeto del presente sumario cuanto la atribución de responsabilidades, deviene aquellas carencias en una cuestión irrelevante.

65.2. Con referencia a la prueba propuesta por los encartados a fs. 331/vta. punto a.1) subpuntos 5. y 6. y fs. 432 punto a.1) subpuntos 5. y 6. procede su rechazo en virtud de no resultar idóneas para desvirtuar los hechos constitutivos de los ilícitos reprochados, como así

tampoco resultan aptas para eximir de responsabilidad a los oferentes, a tenor de las constancias obrantes en el expediente que dan sustento a las imputaciones.

X. Juan Oscar GARCIA GARZON (Síndico Titular, 29.03.83/06.12.84 y Auditor externo, 01.01.84/30.9.84).

66. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Juan Oscar GARCIA GARZON, a quien se le imputan las incriminaciones 5) y 6) formuladas en el presente sumario; destacándose que se le achaca la imputación 5) durante el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y, a su vez, en su carácter de auditor externo designado por el Directorio para efectuar los controles mínimos previstos en la Circular I.F. 135; y, respecto del ilícito 6), por su desempeño en calidad de auditor externo de la entidad, debiendo aclararse que el lapso de actuación del sumariado como auditor se extendió hasta el 30.9.84 -tal como se ha hecho constar en el título- conforme surge del propio texto del informe acusatorio.

67. En su descargo de fs. 298/309 el señor Juan Oscar GARCÍA GARZÓN manifiesta que con relación al cargo 5) que si bien es cierto que el órgano social le había delegado las tareas formales de los controles previstos por la Circular I.F. 135, por las eventuales fallas y/u omisiones en la tarea encomendada debería responder exclusivamente ante su mandante y no ante terceros, conforme a las reglas del mandato; agregando que su conducta no ha tenido influencia alguna con la situación de iliquidez que culminó con la liquidación de la entidad, por lo cual no puede caberle ninguna responsabilidad.

Con referencia al cargo 5), el incoado ha realizado ciertos cuestionamientos insustanciales con los que intenta demostrar la inexistencia de infracción; argumentos que son los volcados en el precedente punto 5.1., al cual cabe remitirse en honor a la brevedad y que fueron adecuadamente analizados y refutados.

Respecto de la imputación 6) referida a las anomalías reprochadas con relación al balance al 30.6.84, ocurridas durante el lapso de actuación del imputado -en su calidad de auditor externo- sostiene que no cabe inferir de su declaración obrante en acta de fs. 121/3 que no se realizaron tareas si realizadas pero de las que no confeccionó papeles de trabajo, o que si confeccionó pero fueron extraviados, o de las que sólo conservó panillas finales de saldos. Asimismo, invoca en su defensa el tercer y cuarto párrafo del anexo II de las Normas Mínimas de Auditorías Externas (Circular CONAU-1) en lo atinente al alcance mínimo de la tarea de los auditores externos, el cual dispone que *"el profesional interviniente podrá dejar de aplicar algunos de los procedimientos mínimos mencionados cuando las cifras involucradas en las cuentas u operaciones correspondientes no sean significativas en relación con los estados contables tomados en su conjunto"*, además de que la tarea *"...será efectuada en base a pruebas selectivas y tanto el alcance como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimos quedarán librados a su criterio profesional"* (sic. fs. 304).

Finalmente hace reserva de su derecho a impugnar por inconstitucional la ley 21.526, por fijar plazos de prescripción mayores a los establecidos para delitos tipificados en el Código Penal.

Por otra parte, a fs. 811 subfs. 1/7 el sumariado efectúa una presentación a modo de alegato, con motivo del cierre de la etapa probatoria, en la cual plantea una excepción de prescripción sobre la base de la aplicación de principios e instituciones que son propios del derecho penal; argumentando, a su vez, que el auto de apertura a prueba del 13.06.95 no interrumpió el curso de la prescripción. Asimismo, se queja de que no fuera agregado el Libro de Controles

Mínimos establecido por la Circular I.F. 135 correspondiente al período de las imputaciones formuladas, y que se hubieran considerado suficientes los elementos probatorios existentes en las actuaciones para formar criterio sobre la ocurrencia de los hechos, siendo que la ofrecida por él no se encuentra producida; por lo cual, concluye que no existe prueba suficiente acerca de los incumplimientos que le fueran reprochados, reiterando, a su vez, conceptos defensivos volcados en su descargo.

68. Con respecto al planteo de prescripción efectuado y con relación a la falta de prueba argüida en razón de no haberse agregado a las actuaciones el Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135 correspondiente al período de actuación del prevenido, procede remitirse a lo expuesto en los precedentes puntos 10. y 11. en donde han sido rebatidos los argumentos y planteos invocados; y, en particular -en dicho punto 11.- donde fueran transcriptas diversas manifestaciones del prevenido reconociendo expresamente las anomalías que hacen al cargo 5); advirtiéndose además, en su alegato, la reiteración de nociones expresadas en su defensa con relación a las imputaciones que se le reprochan.

69. Sobre el cuestionamiento al cargo 5), en tanto y en cuanto los aludidos argumentos del descargo intentan atacar los fundamentos fáctico-normativos de la incriminación, cabe enviar al análisis y fundamentación realizados *ut supra* en el anterior párrafo 5.2., correspondiendo, asimismo, dar por reproducido el precedente punto 5., relacionado con la acreditación del ilícito.

70. Acerca de los argumentos de la defensa en torno al ilícito 6), contrariamente a lo sostenido por el prevenido en torno a la realización de las tareas de auditoría, se impone destacar que en modo alguno puede tenérselas por cumplimentadas cuando el sumariado no puede demostrar que las ha llevado a cabo; debiendo advertirse que, constituyendo los papeles de trabajo la evidencia de que la tarea fue realizada, y no existiendo en su poder dicho medio probatorio - siendo que se hallaba obligado a su conservación- cabe concluir que el prevenido no realizó las tareas descriptas en la acusación.

Con referencia a la "facultad" otorgada a los auditores externos por las Normas Mínimas de Auditorías Externas -en alusión al tercero y cuarto párrafo del Anexo II-, es evidente que no cabe la posibilidad de admitir una aplicación absolutamente discrecional e irrestricta de la misma, toda vez que ello conllevaría, en definitiva, a tornar ineficaces los controles a cargo del mismo.

Así lo estimó la jurisprudencia al decir que: "...dados los fines que la información tiene respecto al Banco Central y a los terceros, y si bien en la aplicación de los procedimientos de auditoría el profesional puede actuar sobre bases selectivas, determinadas según su criterio (conf. Res. Técnica N° 7 y Anexo II -CONAU-1), ello no obsta el cuidado de planificar la tarea teniendo en cuenta el objeto del examen y la característica de aquélla" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, causa N° 16.196, autos "Olivieri, Marcelo A. s/apel. Resolución N° 204/87 del B.C.R.A.", sentencia del 18.11.88, Considerando III, punto 2).

71. Sin perjuicio de lo expuesto, en torno a la acreditación de cada una de las anomalías constitutivas del cargo reprochado, procede también enviar al análisis y fundamentación realizados en el precedente punto 6. del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados.

72. En orden a la determinación de las responsabilidades que cabe al encartado, procede remitirse en honor a la brevedad, a lo expuesto en el anterior párrafo 54. y a la jurisprudencia citada en el precedente punto 55.

Luego, en tanto se ha evidenciado el incumplimiento de los deberes y obligaciones del incoado, como titular del órgano fiscalizador, quien no se ha presentado a demostrar haber puesto reparos a los incumplimientos incriminados llevadas a cabo por la entidad a través del órgano directivo, se pone de manifiesto su conducta omisiva complaciente que ha permitido la configuración de las transgresiones imputadas, por lo que le cabe reproche.

En cuanto a la responsabilidad que le compete al encartado en su calidad de auditor externo -por haber sido delegado para efectuar los controles mínimos previstos por la Circular I.F. 135- procede destacar que la invocación que efectúa el prevenido de las reglas del mandato, con el propósito de sustraerse al control y fiscalización por parte de esta Institución hacia los auditores, resulta a todas luces inadmisibles toda vez que la auditoría externa tiende a garantizar -con el funcionamiento ajustado a las disposiciones vigentes de las entidades que actúan el mercado financiero- los intereses de la comunidad y el orden público, siendo ésta la razón por la que se contratan las auditorías externas sin relación de dependencia, y de allí la gran responsabilidad que asume el auditor externo en el ejercicio de sus funciones.

73. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente en torno a la responsabilidad a que son pasibles los auditores externos, procede recalcar que, conforme a lo establecido en el art. 56 "in fine" de la Ley 21.526, vigente al momento de los hechos, "...Los profesionales intervinientes en las auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los arts. 39, 41 y 42 de la presente ley y de la reglamentación que determine el Banco Central de la República Argentina".

Con respecto a la reserva del caso federal planteado, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

74. Que, en consecuencia, no habiendo demostrado el sumariado haber sido ajeno a los hechos configurantes de las anomalías reprochadas o ser las mismas manifiestamente extrañas a su alcance, procede atribuir responsabilidad al señor Juan Oscar GARCIA GARZON por los cargos 5) y 6); en razón del incorrecto ejercicio de sus funciones fiscalizadoras a tenor de lo arriba referido, y de auditor externo respecto de dicho ilícito 5), y en virtud de su deficiente desempeño como auditor externo con relación a la mencionada imputación 6); debiendo ponderarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar, su menor período de actuación con referencia al cargo 5).

75. Prueba: Respecto de aquella prueba ofrecida por el sumariado y admitida en el auto de apertura a prueba de fs. 624/26 que, a la postre, resultara de imposible producción (*Libro de Controles Mínimos de la Circular I.F. 135* correspondiente al período de actuación del prevenido, y *papeles de trabajo* respectivos -fs. 778 y fs. 660 subfs. 2-), cabe advertir que, toda vez que la falta de esa prueba en las actuaciones no impide la sustanciación sumarial, puesto que no aparece con virtualidad suficiente para controvertir los hechos infraccionales, debido al cúmulo de evidencias instrumentales que fundamentan tanto las anomalías objeto del presente sumario cuanto la atribución de responsabilidades, deviene aquella carencia en una cuestión irrelevante; cabiendo remitirse sobre este particular también a lo expuesto "*ut supra*" en el precedente punto 68.

XI. Ricardo CASTELLI (Auditor Externo, 1.10.84/28.06.85).

76. Que cabe esclarecer la eventual responsabilidad del prevenido Ricardo CASTELLI, a quien se le imputa el cargo 6) formulado en el presente sumario, destacándose que se le achaca la incriminación por su desempeño en el carácter de auditor externo, conforme surge del informe de cargos de fs. 236/253.

77. En su descargo de fs. 593/95 el señor Ricardo CASTELLI manifiesta que su actuación profesional fue intensa, precisa y amplia conforme con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Expresa que las pruebas 42, 44 y 45 se hicieron total o parcialmente según consta en el acta que luce a fs. 124., sin que hubiera reconocido los incumplimientos reprochados. Sostiene en su defensa que las pruebas no realizadas o incompletas en cuanto a su extensión dependen de la significatividad de las cifras incluidas en las cuentas correspondientes y de su criterio profesional, señalando que no era su obligación realizar la totalidad de las mismas. Asimismo, transcribiendo lo establecido por el Anexo II -Normas Mínimas sobre Auditorías Externas- B.C.R.A. expresa que: "La tarea del auditor externo será efectuada en base a pruebas selectivas y tanto el alcance como la oportunidad para la aplicación de los procedimientos mínimos quedarán librados a su criterio profesional" (sic.). También sostiene que no pudo emitir opinión sobre los saldos de las cuentas al inicio del ejercicio y eventuales ajustes con efectos al 1° de Julio de 1984, puesto que su labor fue interrumpida antes de la fecha prevista para dictaminar sobre los Estados Contables al cierre del 30.6.85.

Finalmente efectúa reserva del caso federal.

Por otra parte, a fs. 818 subfs. 1/6 el sumariado realiza una presentación a modo de alegato, con motivo del cierre de la etapa probatoria, en la cual plantea una excepción de prescripción sobre la base de la aplicación de principios e instituciones que son propios del derecho penal; argumentando, a su vez, que el auto de apertura a prueba del 13.06.95 no interrumpió el curso de la prescripción. Por otra parte, reitera conceptos defensivos volcados en su descargo.

78. Con respecto al planteo de prescripción efectuado, procede remitirse a lo expuesto en el precedente punto 10. en donde han sido rebatidos los argumentos invocados; concluyéndose que la presente acción sumarial no se encuentra prescripta.

79. Con referencia a los argumentos defensivos del prevenido, en tanto cita la "facultad" otorgada a los auditores externos por las Normas Mínimas de Auditorías Externas -en alusión al Anexo II-, resulta evidente que no cabe la posibilidad de admitir una aplicación absolutamente discrecional e irrestricta de la misma, toda vez que ello conllevaría, en definitiva, a tornar ineficaces los controles a cargo del mismo.

Así lo estimó la jurisprudencia al decir que: "...dados los fines que la información tiene respecto al Banco Central y a los terceros, y si bien en la aplicación de los procedimientos de auditoría el profesional puede actuar sobre bases selectivas, determinadas según su criterio (conf. Res. Técnica N° 7 y Anexo II -CONAU-1), ello no obsta el cuidado de planificar la tarea teniendo en cuenta el objeto del examen y la característica de aquella" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, causa N° 16.196, autos "Olivieri, Marcelo A. s/apel. Resolución N° 204/87 del B.C.R.A.", sentencia del 18.11.88, Considerando III, punto 2).

En cuanto a la falta de tiempo invocado por el sumariado para emitir opinión sobre los saldos de las cuentas al inicio del ejercicio y eventuales ajustes con efectos al 1.7.84, procede señalar que no resulta serio el argumento defensivo del prevenido, toda vez que el examen de dichos saldos al inicio del ejercicio debe ser realizado en oportunidad en que el auditor entra en funciones y no al momento de dictaminar sobre el cierre del ejercicio anual.

80. Sin perjuicio de lo expuesto, en torno a la acreditación de cada una de las anomalías constitutivas del cargo reprochado procede también enviar al análisis y fundamentación realizados en el precedente punto 6. del anterior considerando I, teniéndose por reproducidos los conceptos allí volcados; cabiendo también hacer hincapié en que de las manifestaciones del prevenido, transcriptas en el acta de fs. 124., surge claramente su falta de cumplimiento de las

pruebas allí detalladas, a la luz de las prescripciones contenidas en los procedimientos mínimos de auditorías respecto de dichas pruebas sustantivas.

Asimismo, en concordancia con las consideraciones apuntadas sobre los incumplimientos reprochados, cabe destacar que los papeles de trabajo acompañados por el señor CASTELLI a fs. 658 (agregados sin acumular como ANEXOS I a V) en nada modifican la situación descripta en torno a las aludidas anomalías y su definitiva acreditación.

81. Con respecto a la importancia y alcance de la función, se impone resaltar que la auditoría externa tiende a garantizar -con el funcionamiento ajustado a las disposiciones vigentes de las entidades que actúan el mercado financiero- los intereses de la comunidad y el orden público, siendo ésta la razón por la que se contratan las auditorías externas sin relación de dependencia, y de allí la gran responsabilidad que asume el auditor externo en el ejercicio de sus funciones.

No obstante todo lo expresado en torno a las obligaciones y responsabilidad a que son pasibles los auditores externos, procede recalcar que, conforme a lo establecido en el art. 56 "in fine" de la Ley 21.526, vigente al momento de los hechos, "*...Los profesionales intervinientes en las auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los arts. 39, 41 y 42 de la presente ley y de la reglamentación que determine el Banco Central de la República Argentina*".

Con respecto a la reserva del caso federal planteado, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

82. Que, en consecuencia, habiendo el sumariado intervenido en los hechos configurantes de las infracciones reprochadas, procede atribuir responsabilidad al señor Ricardo CASTELLI por el cargo 6), en razón del deficiente ejercicio de sus funciones de auditor externo.

83. **Prueba:** la adjuntada por el sumariado en su descargo y que luce agregada a fs. 596/98, la acompañada a fs. 658 y vta. (agregadas sin acumular como ANEXOS I a V), y la adjuntada a fs. 818 subfoja 6, han sido adecuadamente ponderadas.

CONCLUSIONES:

84. Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas físicas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos.

85. Atento a la gravedad y magnitud de las infracciones, cabe sancionar a los señores Benjamín SZPAYZER, Roberto José ESTRADA, Juan Jorge Guido TROYER, Guillermo Esteban COPPOLA, Luis Alejandro CARDOSO, Luis Pedro PICCHI, Alberto Ernesto COMINELLI, Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA, y Juan Oscar GARCÍA GARZON hallados responsables, con la pena prevista en el inciso 5) del citado Artículo 41, sin perjuicio de la imposición de sanción de multa.

86. En cuanto a la sanción que establece el inciso 3) de dicho Artículo 41, para su graduación se tiene en cuenta el último tope máximo de \$ 929.310,28 (novecientos veintinueve mil trescientos diez pesos con veintiocho centavos), establecido en la Comunicación "B" 4428 del 8.11.90 (B.O. del 12.12.90), haciendo aplicación del artículo 41 de la Ley N° 21.526 en la redacción

anterior a la reforma introducida por la Ley N° 24.144 (B.O. del 22.10.92); ello así por ser dicha normativa la que se encontraba vigente a la época de los hechos infraccionales.

Que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la SEFyC ha tomado la intervención que le compete.

Que el Superintendente de la SEFyC. es competente para decidir sobre el tema planteado, a tenor de lo prescripto por el Decreto 13/95, restablecido en su vigencia por la Ley N° 25.780.

Por ello,

**EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS
RESUELVE:**

- 1°) No hacer lugar a los planteos de prescripción interpuestos por los señores Adolfo Melitón AGUILERA, Enrique Alfredo VIEL, Edgardo Rubén GIOSA, Daniel José VIGO, Benjamín SZPAYZER, Juan Jorge Guido TROYER, Luis Alejandro CARDOSO, Juan Oscar GARCÍA GARZÓN, y Ricardo CASTELLI.
- 2°) Rechazar la prueba ofrecida por los señores Alberto Ernesto COMINELLI, Guillermo Esteban COPPOLA, Benjamín SZPAYZER, Juan Jorge Guido TROYER, y Luis Alejandro CARDOSO, en virtud de las razones expuestas en los Considerandos: IV, pto. 31.2.; VII, pto. 49.2...; IX, pto. 65.2; IX, pto. 65.2; y IX, pto. 65.2., respectivamente.
- 3°) Imponer las siguientes sanciones en los términos del artículo 41, incisos 2), 3) y 5) de la Ley N° 21.526:
 - Al señor Roberto José ESTRADA: multa de \$ 404.000 (pesos cuatrocientos cuatro mil) e inhabilitación por seis (6) años.
 - Al señor Benjamín SZPAYZER: multa de \$ 380.000 (pesos trescientos ochenta mil) e inhabilitación por cinco (5) años.
 - Al señor Juan Jorge Guido TROYER: multa de \$ 366.000 (pesos trescientos sesenta y seis mil) e inhabilitación por cinco (5) años.
 - Al señor Guillermo Esteban COPPOLA: multa de \$ 305.000 (pesos trescientos cinco mil) e inhabilitación por cuatro (4) años.
 - Al señor Luis Pedro PICCHI: multa de \$ 190.000 (pesos ciento noventa mil) e inhabilitación por tres (3) años.
 - Al señor Luis Alejandro CARDOSO: multa de \$ 190.000 (pesos ciento noventa mil) e inhabilitación por tres (3) años.
 - Al señor Alberto Ernesto COMINELLI: multa de \$ 78.000 (pesos setenta y ocho mil) e inhabilitación por dos (2) años.
 - Al Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA: multa de \$ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil)

100

100

e inhabilitación por dos (2) años.

-Al señor Juan Oscar GARCÍA GARZON: multa de \$ 32.000 (pesos treinta y dos mil) e inhabilitación por un (1) año.

-Al señor Ricardo CASTELLI: multa de \$ 18.000 (pesos dieciocho mil).

-Al cada uno de los señores Adolfo Melitón AGUILERA, Enrique Alfredo VIEL, Edgardo Rubén GIOSA y Daniel José VIGO: APERCIBIMIENTO

4°) El importe de las multas mencionadas en el punto 3°) deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas -Multas- Ley de Entidades Financieras -Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley N° 21.526, modificado por la ley 24.144.

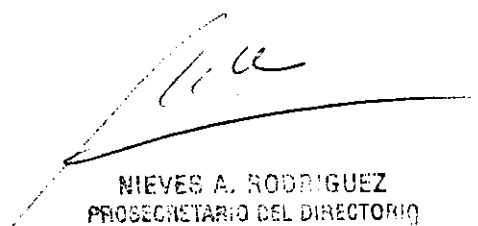
5°) Notifíquese, con los recaudos que previene la Comunicación "A" 4006 del 26.08.03, en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar -en su caso- las personas sancionadas con la penalidad prevista por el inciso 3° del artículo 41 de la Ley 21.526.

JORGE A. LEVY
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

DO NOTA PARA DAR CUENTA AL DIRECTORIO

ario del Directorio

ENE 2004



NIEVES A. RODRIGUEZ
PROSECRETARIO DEL DIRECTORIO